

Correo Argentina Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3ª REUNIÓN - 2ª SESIÓN ORDINARIA

11 DE MARZO DE 1998

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor CARLOS F. RUCKAUF

del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, señora BERTA ALDALUR  
y doctor RODOLFO N. ADÉN

### PRESENTES

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BARTOLUCCI, Mario L.  
BAUM, Daniel  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
DEL PIERO, Pedro  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo  
GARCÍA ARECHA, José M.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENEHINI, Javier R.

MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
OUDÍN, Ernesto  
PARDO, Ángel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José María  
SAGER, Hugo Abel  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVEVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

CABANA, Fernando F.  
CAFIERO, Antonio F.  
GALVÁN, Raúl A.  
OYARZÚN, Juan C.  
VARIZAT, Daniel A.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

5. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión sw la fecha. (Pág. 1045)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, categoría A, a doña María Matilde Lorenzo Alcalá. Se aprueba. (Pág. 1046)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría A, a don Julio César Freyre. Se aprueba. (Pág. 1047)
8. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor junto con el señor senador Romero Feris sobre inundaciones en Corrientes (S.-102/98). (Pág. 1047)
9. Consideración sobre tablas de dos proyectos de resolución de los señores senadores Berhongaray y Vaquir por los que se expresa preocupación por la desaparición de menores de nacionalidad guatemalteca (S.-2.632 y 2.633/97). (Pág. 1050)
10. Consideración sobre tablas de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión sobre ministerio público (S.520, 668, 1.350, 1.306 y 1.910/95; 623, 779 y 866/96; P.-190/95 y 12/96; P.E.-500/95 y 186/96). Se aprueban. (Pág. 1052)
11. Moción formulada por el señor senador Maya para modificar el plan de labor. Se aprueba. Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 1086)
12. Apéndice:  
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1098)

—En Buenos Aires, a las 17 y 5 del miércoles  
11 de marzo de 1998:

## 1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Presidente.** — La Presidencia solicita a los señores colaboradores de bloque que arbitren los medios necesarios a efectos de que los senadores ingresen en el recinto y así podamos comenzar la sesión.

**Sr. Avelín.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: creo que lo más apropiado sería fijar un tiempo límite para iniciar la sesión.

**Sr. Presidente.** — Vamos a esperar diez minutos. Luego pasaremos lista y, si no hay quórum, procederé a levantar la sesión.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 25:

**Sr. Presidente.** — Ruego a los señores senadores tomar asiento.

La sesión está abierta.

## 2

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por San Luis don Mario L. Bartolucci a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Bartolucci procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 3

## HOMENAJE

**Sr. Presidente.** — Señor senador Alasino: como primer tema figura el homenaje al 11 de marzo de 1973, pero no se encuentra presente el señor senador Cafiero, quien iba a hacer uso de la palabra por el bloque Justicialista.

**Sr. Alasino.** — El señor senador Cafiero iba a rendir ese homenaje...

**Sr. Presidente.** — Sí, pero no se encuentra presente en el recinto y tampoco en la casa, según indica mi tablero.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente.** — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir homenaje al 11 de marzo de 1973.

Hará uso de la palabra, en representación de la Cámara en su conjunto, el señor senador por Corrientes.

**Sr. Pardo.** — Señor presidente, señores senadores: el 11 de marzo de 1973 el justicialismo escribe una de sus páginas más gloriosas en ese libro tan extenso de la historia argentina, que viene marcando el rumbo político, económico, cultural y social de nuestra Nación.

Ese día la República Argentina consagra la fórmula Cámpora -Solano Lima. Fue ese un paso necesario en la historia para demostrar a aquellos que usufructuaban el poder a través de los golpes de Estado que el general Perón y los justicialistas estaban en condiciones de recuperar la República y la democracia.

Creo que ese día 11 de marzo comienza a signarse, imprimiéndose con tinta indeleble, una orientación política; es el inicio de algo nuevo que permitía ejercer el derecho de pensar, sin fronteras, cercenado a través de tantos años de dictaduras.

realizando, para colaborar en el reclamo humanitario y de estricta justicia de esta ciudadana argentina casada con un guatemalteco de origen jordano.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Figueroa.** — Señor presidente: solicito autorización para que se incluya mi firma.

**Sr. Vaquir.** — Cómo no.

**Sr. Presidente.** — Si hay asentimiento, se incluirá la firma del señor senador Figueroa en los proyectos.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en forma conjunta los dos proyectos de resolución, que prácticamente tienen una idéntica redacción, uno dirigido al Congreso de la República de Guatemala y el otro al Senado del Reino Hachemita de Jordania.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Quedan aprobadas las resoluciones por unanimidad. Se procederá en consecuencia.

## 10

### MINISTERIO PUBLICO

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar sobre tablas las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión sobre Ministerio Público, expedientes S.-520/95, S.-668/95, S.-1.350/95, S.-1.306/95, S.-1.910/95, S.-623/96, S.-779/96, S.-866/96, P.-190/95, P.-12/96, P.E.-500/95 y P.E.-186/96.

En primer lugar, se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se requieren los dos tercios de los votos.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (Lee)

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1997.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece el régimen orgánico del Ministerio Público y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, tanto en general como en particular (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma

*El Senado y Cámara de Diputados...*

## LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

### TITULO I

#### Organización e integración del Ministerio Público

### CAPITULO I

#### Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

Posee una organización jerárquica, la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan y fundamente las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

#### Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados:

- Procurador general de la Nación;
- Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fiscal nacional de Investigaciones Administrativas;
- Fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c);
- Fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas;
- Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- Defensor general de la Nación;
- Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, de casa-

ción y ante los tribunales orales en lo criminal y sus adjuntos, y defensores públicos oficiales ante la Cámara de Casación Penal, adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, ante los tribunales orales en lo criminal, adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal de primera y segunda instancia del interior del país, ante los tribunales federales de la Capital Federal y los de la Defensoría General de la Nación;

- d) Defensores públicos de menores e incapaces adjuntos de segunda instancia y defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación;
- e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia y defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones;
- f) Defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

## CAPÍTULO II

### *Relación de servicio. Designaciones*

Art. 5° — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo, de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

### *Concurso*

Art. 6° — La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso público de oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación según el caso. El tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público con jerarquía no inferior a los cargos previstos en el inciso c) de los artículos 3° y 4°, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los enunciados en el artículo 3° incisos b) y c) o en el artículo 4° incisos b) y c), según corresponda; salvo cuando el concurso se realice para cubrir cargos de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensor público ante tribunales colegiados, supuestos en los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso.

### *Requisitos para las designaciones*

Art. 7° — Para ser procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional.

Para presentarse a concurso para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; fiscal general ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; y los cargos de defensores públicos enunciados en el artículo 4° incisos b) y c), se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para ser fiscal general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3° inciso c); fiscal ante los jueces de primera instancia; fiscal de la Procuración General de la Nación; fiscal de Investigaciones Administrativas; y los cargos de defensores públicos enunciados en el artículo 4° incisos d) y e), se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de la Procuración General de la Nación, fiscal auxiliar de primera instancia y defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias con por lo menos dos (2) años de antigüedad en el título de abogado.

### *Juramento*

Art. 8° — Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación —según corresponda— o ante el magistrado que éstos designen a tal efecto.

### *Incompatibilidades*

Art. 9° — Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de

su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

#### *Excusación y recusación*

Art. 10. — Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las causales que — a su respecto — prevean las normas procesales.

#### *Sustitución*

Art. 11. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador fiscal o el defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.

De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

#### *Remuneración*

Art. 12. — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, percibirán un 20% más, de las remuneraciones que correspondan a los jueces de cámara computables solamente sobre los ítem sueldo básico, suplemento, remuneración acordada C.S.J.N. 71293, compensación jerárquica y compensación funcional;
- c) El fiscal nacional de investigaciones administrativas y los magistrados enumerados en el inciso c) de los artículos 3º y 1º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara;
- d) Los magistrados mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 3º y 1º de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de un juez de primera instancia;
- e) Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia y de la Procuración General de la Nación, y los defensores auxiliares

de la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara;

- f) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

#### *Estabilidad*

Art. 13. — Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad. Los magistrados que alcancen la edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de cinco (5) años, y podrán ser repetidas indefinidamente, mediante el mismo procedimiento.

#### *Inmunidades*

Art. 14. — Los magistrados del Ministerio Público gozan de las siguientes inmunidades:

No podrán ser arrestados excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.

Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda, y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo hacerlo. En su defecto deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

#### *Traslados*

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. Sólo podrán ser destinados temporalmente a funciones distintas de las adjudicadas en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 33, inciso g), y 51, inciso f).

#### *Poder disciplinario*

Art. 16. — En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador general de la Nación y el de-

fensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) Prevención;
- b) Apremio;
- c) Multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se registrará por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

#### *Correcciones disciplinarias en el proceso*

Art. 17. — Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o al defensor general de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

#### *Mecanismos de remoción*

Art. 18. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley por las causales de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.

#### *Tribunal de Enjuiciamiento*

Art. 19. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete (7) miembros:

- a) Tres (3) vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ex procura-

dores o defensores generales de la Nación y serán designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

- b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión y serán designados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;

- c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o fiscales generales y otro entre los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensores públicos ante tribunales colegiados.

A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.

El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, o por su presidente en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por alguno de aquéllos. Tendrá su asiento en la Capital Federal y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones, contados a partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal hasta su finalización.

Una vez integrado el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior a fiscal general o defensor público ante los tribunales colegiados designados por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un defensor oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, a opción del imputado.

La intervención como integrante del tribunal, fiscal o defensor de oficio constituirá una carga pública.

Los funcionarios auxiliares serán establecidos, designados y retribuidos en la forma que determine la reglamentación que conjuntamente dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación.

#### *Reglas de procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento*

Art. 20. — El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las siguientes reglas:

- a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, de oficio o por denuncia, fundados en la invocación de hechos que configuren las causales de remoción previstas en esta ley;

- b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá ser presentada ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, quienes podrán darle curso conforme el inciso precedente o desestimarla por resolución fundada con o sin prevención sumaria. De la desestimación el denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento dentro del plazo de diez (10) días de notificado el rechazo. La queja deberá presentarse ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, quienes deberán girarla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su consideración;
- c) El procedimiento ante el tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicten conjuntamente el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:

1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes.
3. Durante el debate el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El pedido de absolución no será obligatorio para el tribunal, pudiendo condenar aun en ausencia de acusación fiscal.
4. La sentencia deberá dictarse en el plazo no mayor de quince (15) días que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate.
5. Según las circunstancias del caso el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimado necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión el imputado percibirá el setenta por ciento (70%) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a los resultados del juicio.

Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.

6. El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes.

7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiere de la prueba o aquella ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente.
8. La sentencia podrá ser recurrida por el fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las actuaciones a la cámara mencionada, dentro de los cinco (5) días de interpuesto.

### CAPÍTULO III

#### *Administración general y financiera del Ministerio Público*

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades, en relación a sus respectivas facultades de gobierno:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional, de personal, disciplinarios, y todos los demás que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y las leyes;
- c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público;
- d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral creada por esta ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público;
- f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo-financiero, acreditado y reconocido conforme la normativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

#### *Autarquía financiera*

Art. 22. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con crédito presu-

puerario propio, el que será atendido con cargo a "Rentas generales" y con recursos específicos.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

#### *Relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo*

Art. 23. — El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.

#### *Ejecución presupuestaria*

Art. 24. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 9°, 34 y 117 de la ley 24.156.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

### TITULO II

#### **Funciones y actuación**

##### Sección I

#### *Normas generales*

#### *Funciones del Ministerio Público*

Art. 25. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;
- b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
- c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- d) Promover la acción civil en los casos previstos por la ley;
- e) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre de las personas, venias supletorias, declaraciones de pobreza;
- f) En los que se alegue privación de justicia;
- g) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República;

h) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal;

i) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieran a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;

j) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;

k) Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;

l) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;

ll) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

#### *Requerimiento de colaboración*

Art. 26. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán —para el mejor cumplimiento de sus funciones— requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.

Los fiscales ante la justicia penal, notificados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— sin perjuicio de las directivas que el juez competente impartirá a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

#### *Funciones excluidas*

Art. 27. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: la representación del Estado y/o del fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al



Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

### *Carácter de los dictámenes*

Art. 28. — Los dictámenes, requerimientos y toda otra intervención en juicio de los integrantes del Ministerio Público deberán ser considerados por los jueces con arreglo a lo que establezcan las leyes procesales aplicables al caso.

### *Principio de legalidad*

Art. 29. — Cuando se tratare de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley.

### *Deber de informar*

Art. 30. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según corresponda, y por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

### *Deber de obediencia - Objeciones*

Art. 31. — Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general según sea el caso, su criterio disidente, mediante un informe fundado.

Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiere en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

### *Informe anual al Congreso*

Art. 32. — Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia - Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, res-

pectivamente - el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio; y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

## Sección II Ministerio Público Fiscal

### CAPÍTULO I Del procurador general de la Nación

Art. 33. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

El procurador general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:

1. Causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlará su sustanciación a fin de preservar el debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda a raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6º, apartados b) y c) del decreto ley 1.285/58.
4. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela.

A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, con excepción de los casos en los que, según la sana discreción del Tribunal, corresponda el rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuesen manifiestamente inadmisibles, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general.

b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que correspondan, y dar ins-

trucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

- c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- d) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal;
- f) Delegar sus funciones en los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de esta ley;
- g) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estará sujeta a las directivas del titular;
- h) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- j) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
- k) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- l) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- II) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar

los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;

- m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- n) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- ñ) Confeccionar el programa del Ministerio Público Fiscal dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público de la Defensa, para su remisión al Congreso de la Nación;
- o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
- p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- q) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal;
- r) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 3º, incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32, se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- s) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres poderes del Estado;
- t) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal;
- v) Ejercer por delegación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas de competencia originaria de ésta, las funciones de instrucción en los términos del artículo 196, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación.

#### *De la Procuración General de la Nación*

Art. 34. — La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del procurador general de la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio Público Fiscal.

En dicho ámbito se desempeñarán los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y

todos los magistrados que colaboren con el procurador general de la Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el procurador general disponga encomendarles.

*De los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Art. 35. — Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellas causas en que así lo resuelva el procurador general de la Nación;
- b) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- c) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- d) Informar al procurador general sobre las causas en que intervienen;
- e) Colaborar con el procurador general en su gestión de gobierno del Ministerio Público Fiscal, en los términos y condiciones enunciados en el artículo precedente.

*Fiscales de la Procuración General de la Nación*

Art. 36. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga, con los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso g) del artículo 33 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 3º de la presente ley.

*Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única*

Art. 37. — Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen las siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;

- b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- f) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevengan las leyes;
- g) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- h) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del área de su competencia;
- i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- j) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

*Fiscales generales adjuntos*

Art. 38. — Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistido en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

*Fiscales ante los jueces de primera instancia*

Art. 39. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

Deberán intervenir en los procesos de amparo, de hábeas corpus y de hábeas data y en todas las cuestiones de competencia; e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 40. — En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuere procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Art. 41. — Los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo civil y comercial, contencioso administrativo, laboral y de seguridad social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan;
- b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
- c) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

*Fiscales auxiliares ante  
los tribunales de primera instancia*

Art. 42. — Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán en relación inmediata con los

fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes facultades y deberes:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

**CAPÍTULO II**

*Fiscalía de Investigaciones Administrativas.  
Organización*

Art. 43. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

*Designaciones y remociones*

Art. 44. — Los magistrados de la fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley.

*Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas*

Art. 45. — El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos;
- c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la fiscalía tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación con la intervención necesaria del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33, inciso t).

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción;

- d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependen e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- g) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se desempeñen en la fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación;
- j) Ejecutar todos sus cometidos, ajustándolos a la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.

#### *Fiscalías generales de Investigaciones Administrativas*

Art. 46. — Los fiscales generales de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- b) Reemplazar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del procurador general de la Nación;
- c) Informar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas respecto de las causas en las que intervinieren.

#### *Fiscales generales adjuntos y fiscales de Investigaciones Administrativas*

Art. 47. — Los fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y los fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la fiscalía que este último les asigne.

#### *Comunicación de procesos penales*

Art. 48. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

#### *Investigaciones disciplinarias*

Art. 49. — Cuando en la investigación practicada por la fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate, de conformidad con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la fiscalía será tenida necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

#### *Competencias especiales*

Art. 50. — Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos *ad hoc*;
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior, pueda obstaculizar gravemente la investigación.

#### *Sección III Ministerio Público de la Defensa*

##### *Defensor general de la Nación*

Art. 51. — El defensor general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa;
- b) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de esta ley;
- c) Disponer por sí o mediante instrucciones generales o particulares, a los integrantes del Minis-

terio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos le confieran;

- d) Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional;
- e) Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados;
- f) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran la defensa oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos la hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los defensores que se designen estará sujeta a las directivas del titular;
- g) Efectuar la propuesta en tema a que se refieren los artículos 5° y 6° de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- h) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes;
- i) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial;
- j) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley, cuando, a su juicio, se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación —ante los órganos competentes— cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;
- k) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
- l) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;

- ll) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales —cuando sea del caso— especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros países;
- m) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes, supervisar su desempeño y lograr el mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes le otorgan a dicho ministerio;
- n) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;
- ñ) Confeccionar el programa del Ministerio Público de la Defensa dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público Fiscal, para su remisión al Congreso de la Nación;
- o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el servicio administrativo financiero del organismo;
- p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- q) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4°, incisos b) y c) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32, se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
- r) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las defensorías públicas oficiales y el grupo de defensores públicos oficiales, defensores públicos oficiales adjuntos y auxiliares de la Defensoría General de la Nación que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- s) Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- t) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa;

- v) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.

#### *De la Defensoría General de la Nación*

Art. 52. — La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del defensor general de la Nación, como jefe del Ministerio Público de la Defensa. En dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el defensor general de la Nación, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor general disponga encomendarles.

#### *Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Art. 53. — Los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán al defensor general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en que intervengan;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

#### *Defensores públicos de menores e incapaces*

Art. 54. — Los defensores públicos de menores e incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;
- b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen;
- c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación legal; fuere necesario, suplir la inacción de sus asistentes o represen-

tantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;

- d) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la tutela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentran. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;
- f) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal;
- g) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.911, sobre internación y externación de personas, y controlar que se efectúen al Registro de Incapaces las comunicaciones pertinentes;
- h) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- i) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- j) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- k) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- l) Responder los pedidos de informes del defensor general;
- m) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 55. — Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, cuando no hubieren sido designados para actuar también en primera instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover o continuar las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;
- d) Dividir los conflictos de turno y competencia que se planten entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Elevar un informe anual al defensor general de la Nación sobre la gestión del área bajo su competencia;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

Art. 56. — Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales orales serán parte necesaria en todo expediente de disposición tutelar que se forme respecto de un menor autor o víctima de delito conforme las leyes de menores vigentes; y deberán asistir bajo pena de nulidad, a los juicios orales de menores conforme lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 57. — El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 pasa a integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

#### *Tutores y curadores públicos*

Art. 58. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 59. — Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los títulos VII a XIV de la sección II del libro I del Código Civil, sin perjuicio de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el defensor general de la Nación. Especialmente deberán:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando

que los primeros sean instruidos para que puedan —en su momento— acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación;

- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados; cuidar las personas de ambos así como también su patrimonio; proveer, cuando corresponda, a su adecuada administración;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;
- g) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se les formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
- h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;
- i) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.

#### *Defensores públicos oficiales*

Art. 60. — Los defensores públicos oficiales, en las instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que les encomiende el



defensor general de la Nación, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre el trámite procesal de su causa;
- c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlos en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo las defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan; y patrocinárselas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
- f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste el informe anual relativo a su gestión;
- g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 61. — Los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia tendrán — en especial — las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores públicos oficiales de las instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores públicos oficiales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomienda el defensor general de la Nación.

Los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación tendrán las atribuciones descriptas en los incisos c) y d) de este artículo.

*Defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única*

Art. 62. — Los defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actuarán en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales, éste así lo resuelva, y en caso de licencia, exención, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

*Honorarios de los defensores públicos oficiales*

Art. 63. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor público oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socio-ambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ello surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Art. 64. — En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa.

#### Sección IV.

*Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público*

Art. 65. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley, las normas pertinentes del decreto ley 1.285/58 y las reglamentaciones que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación. En particular se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que hubieren pasado a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa, y se encuentran prestando servicios allí, quedan incorporados a su planta permanente;

- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad.

El traspaso de los funcionarios y empleados de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación al Ministerio Público de la Defensa, no afectará derechos adquiridos que comprendan el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos;

- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.

Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación;

- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante y de acuerdo a lo que establezca la pertinente reglamentación. Los magistrados mencionados podrán delegar esta competencia.

### TITULO III

#### Disposiciones complementarias

##### *Representación del Estado en juicio*

Art. 66. — A los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 —primera parte— de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del cuerpo de abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados.

En el interior de la República, cuando el organismo interesado carezca en el lugar de los servicios referidos, la citada representación será ejercida por delegados del

cuerpo de abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación y designados por el Poder Ejecutivo; en su defecto, la ejercerán letrados integrantes del cuerpo de abogados del Estado dependientes de otros servicios jurídicos.

Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente la representación judicial estatal será ejercida por el procurador del Tesoro de la Nación.

Cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo hagan necesario, tal representación podrá ser ejercida por otros abogados contratados como servicio de asistencia al cuerpo de abogados del Estado, previo dictamen favorable del procurador del Tesoro de la Nación.

Art. 67. — Los representantes judiciales del Estado se ajustarán a las instrucciones que impartan el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados. En caso que la representación sea ejercida por delegados del cuerpo de abogados del Estado, esas instrucciones se impartirán a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. En defecto de ellas, los representantes desempeñarán su cometido en la forma que mejor contemple los intereses del Estado nacional confiados a su custodia.

Art. 68. — En todos los juicios en trámite en que el Estado nacional o sus entes descentralizados estén representados por integrantes del Ministerio Público, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá adoptar las medidas conducentes para la designación de nuevos representantes de acuerdo a las disposiciones de esta ley, dentro de los 365 días de su entrada en vigencia.

Los integrantes del Ministerio Público continuarán ejerciendo la representación judicial del Estado tanto en los juicios en trámite como en los que se iniciaren, hasta su reemplazo efectivo.

Art. 69. — A los fines del cumplimiento de lo previsto en los artículos 27, 66 y 68 de la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer la creación, supresión, transferencia y redistribución de dependencias, servicios, funciones y cargos, así como efectuar las reestructuraciones de créditos presupuestarios que a tal efecto, sean necesarias.

##### *Remisión de pliegos. Acuerdo del Senado*

Art. 70. — Todos los actuales integrantes del Ministerio Público que se desempeñen en los cargos previstos en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3º y 4º de esta ley gozan de la estabilidad que prevé el artículo 120 de la Constitución Nacional. El procurador general y el defensor general deberán obtener el acuerdo previsto en el artículo 5º. A tal efecto el Poder Ejecutivo remitirá los pliegos correspondientes dentro de los treinta días corridos contados a partir de la sanción de la presente ley.

Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la remoción de dichos funcionarios por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la presente ley.

##### *Recursos*

Art. 71. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

El presupuesto específicamente deberá asignar las sumas que hoy corresponden a la Dirección de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, al programa del Ministerio Público de la Defensa.

#### *Equiparaciones. Ministerio Público Fiscal*

Art. 72. — Los actuales cargos del Ministerio Público Fiscal modificarán su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el inciso a) del artículo 3°;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso b) del artículo 3°;
- c) El fiscal general de Investigaciones Administrativas, en el cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, previsto en el inciso b) del artículo 3°.

Mientras permanezca en el cargo, el actual fiscal general de Investigaciones Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato vigente al momento de la sanción de la presente ley;

- d) Los fiscales de cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; el procurador general del Trabajo, y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y los secretarios de la Procuración General de la Nación, en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3°;

- e) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el subprocurador general del Trabajo, los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3°.

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9° de la ley 18.345;

- f) Los fiscales y los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3°;

- g) Los fiscales adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3°.

Mientras permanezcan en el cargo, los actuales fiscales adjuntos ante los juzgados fe-

derales de primera instancia en lo criminal y correccional tendrán la equiparación presupuestaria, remuneratoria y previsional correspondiente a los cargos previstos en el inciso e) del artículo 3°, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 12 de la presente ley.

#### *Equiparaciones. Ministerio Público de la Defensa*

Art. 73. — Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa modificarán su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor general de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a) del artículo 4°;
- b) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso b) del artículo 4°;

- c) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la Cámara de Casación Penal, sus adjuntos, los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo criminal, sus adjuntos, ante los tribunales federales de la Capital Federal, los de primera y segunda instancia del interior del país y los secretarios de la Defensoría General de la Nación, en los respectivos cargos de defensores públicos oficiales ante la Cámara de Casación Penal, adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, defensores públicos oficiales ante los tribunales orales en lo criminal, adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, ante los tribunales federales de la Capital Federal, de primera y segunda instancia del interior del país y de la Defensoría General de la Nación, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4°;

- d) Los asesores de menores e incapaces de cámara y los asesores de menores ante los tribunales orales, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia y ante los tribunales orales en lo criminal, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4°;

- e) Los secretarios letrados de la Defensoría General de la Nación, en los cargos de defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación, conforme lo previsto en el inciso d) del artículo 4°;

- f) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes de primera, y de primera y segunda instancia, en los cargos de defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4°;

- g) Los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4°;

- h) Los prosecretarios letrados de la Defensoría General de la Nación en los cargos de defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación,

conforme con lo previsto en el inciso f) del artículo 4°.

#### *Estructura*

Art. 74. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, en sus respectivos ámbitos, podrán modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley mediante el dictado de reglamentaciones, en tanto no afecten los derechos emergentes de la relación de servicio de los magistrados, funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteración que implique la afectación de tales derechos y la creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente aprobada por el Congreso.

Art. 75. — En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se hubiesen designado los defensores oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia, ejercerán la función los defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o, en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones correspondientes, dichos defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 4°.

#### *Derogaciones*

Art. 76. — Deróganse las leyes 15.461 y 21.483; los títulos VII, VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6° y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58; el artículo 3°, incisos a) y b), y 5° de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.315; el artículo 3° de la ley 23.091 en tanto establece que el defensor oficial ante la Corte Suprema ejerce la competencia ante ella en forma única y exclusiva; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3° de la ley 3.952, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; la ley 3.367 y la ley 17.516 en cuanto se refieren a la representación por los procuradores fiscales y el procurador general de la Nación en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el fisco demande o sea demandado y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Art. 77. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.

Juan Estrada.

**Sr. Presidente.** — En consideración las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: deseo manifestar la profunda satisfacción de nuestro bloque y del con-

junto del justicialismo por poder llegar a dar sanción hoy a la norma en consideración.

Y debo expresar una doble satisfacción como miembro de este cuerpo, dado que fue el Senado el autor del proyecto original sobre régimen orgánico del Ministerio Público.

Esta iniciativa motivó profundos debates y llegó a la Cámara de Diputados en el marco de un importante consenso logrado en el Senado, luego de un trabajo de estudio, análisis y consulta realizado con los hombres y mujeres que actualmente integran el Ministerio Público, con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, con los representantes de los trabajadores y con hombres del pensamiento jurídico y doctrinario del derecho argentino.

Luego de ese trabajo de investigación y consulta, la Comisión de Asuntos Constitucionales, por iniciativa de nuestro bloque y en base a un proyecto de quien les habla y de otros señores senadores justicialistas, ha dado a este cuerpo el proyecto que espera la República, quizás desde la época de la organización nacional.

Digo esto, señor presidente, porque después de más de cien años la Nación podrá contar con una ley orgánica del Ministerio Público. Se han realizado al respecto importantes estudios que quedaron en meras iniciativas. Y así me vienen a la memoria los trabajos realizados por el entonces diputado Gauna, quien ha trabajado muchísimo en esta cuestión desde su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata de una estructura, de un órgano que nunca pudo encontrar su ubicación institucional. Comenzó perteneciendo al Poder Judicial de la Nación; luego pasó a formar parte del Poder Ejecutivo y a depender de sus instrucciones con motivo de la modificación sufrida por la estructura del Poder Judicial, más concretamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se colocó a los miembros del Ministerio Público —según lo establece textualmente la ley 23.774— ante dicha Corte, con lo cual este órgano ha salido de la órbita del Poder Judicial para ingresar en la del Poder Ejecutivo.

Este asunto ha reconocido inclusive debates profundos en torno a la estabilidad de los integrantes del Ministerio Público que, obviamente, han debido soportar decisiones arbitrarias, tanto los miembros del Ministerio Público Fiscal como los defensores de pobres y ausentes.

Tampoco se nos ha escapado, señor presidente, la necesidad —que surge de la propia norma constitucional— de autonomía funcional y financiera que requiere ese organismo.

Fijese, entonces, señor presidente, la importancia de esta iniciativa del justicialismo que hoy podemos ver convertida en ley de la Nación.

Es la única norma que estructura órganos y poderes del Estado, que organiza y cambia el status institucional de los poderes del Estado, que crea nuevas figuras de la Constitución Nacional y que no tiene plazo constitucional para su sanción.

Si la tuvo el Consejo de la Magistratura, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y otras leyes importantes que organizaron los poderes públicos.

Esta norma no. Quizá porque nadie en sí confiaba en que era necesaria y correcta para el funcionamiento de la República esta suerte de jerarquización y ubicación sui generis del Ministerio Público como un órgano extrapoder, es decir, que no dependa de ninguno de los poderes del Estado.

Esto surge del artículo 120 de la Carta Magna, pero no hay una cláusula transitoria que establezca un plazo determinado, con lo cual podría haber corrido la suerte, por ejemplo, del juicio por jurados, que fue establecido en la Constitución de 1853 y nunca se reglamentó.

Es decir que este Congreso está tratando una norma que no tiene plazo para su sanción.

No estamos con un mandato expreso de la Convención Constituyente. Esto es doblemente importante. A pesar de ello, el justicialismo tomó la iniciativa.

Este tema constituyó un gran debate, y el concepto de la estabilidad de los miembros del Ministerio Público desvirtuó la importancia del mismo.

Y digo que se desvirtuó porque el proyecto original de mi autoría acompañado por los legisladores del bloque Justicialista contemplaba la estabilidad para todos los miembros del Ministerio Público, tanto la cabeza —procurador y defensor general— como el resto de la estructura, en la convicción de que era necesario partir de una situación de estabilidad legislativa otorgada por ley frente a abusos que anteriores gobiernos constitucionales habían llevado a cabo.

¡Y fíjese qué paradoja, señor presidente! Luego vino una actitud de la oposición política, concretamente del partido radical, que cuestionó esta legislación. En el viejo artículo 69 del dictamen pusieron en tela de juicio la autonomía de los miembros del Ministerio Público.

Y se generó todo un debate. Con el tema de la estabilidad buscábamos terminar —reitero— con los abusos en que se había incurrido. ¿A qué me refiero? Como ejemplo tengo en mis manos una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación del 11 de abril de 1986 firmada por el doctor Alconada Aramburu, entonces ministro de Justicia, en donde dejaba cesantes a cinco fiscales, sin sumario, sin ningún tipo de prevención, arbitrariamente, ni siquiera por decreto del Poder Ejecutivo sino por una resolución del Ministerio de Justicia.

Entonces buscábamos frenar este tipo de abusos a partir de la norma que organizaría al Ministerio Público. Luego la oposición planteó el debate en torno a la estabilidad de la cabeza del Ministerio Público.

Comenzó una serie de consultas con miembros de dicho organismo —fiscales y defensores— y se generó un debate en doctrina acerca del tema de la estabilidad. ¿En que consistía? Algunos miembros del Ministerio Público, aprovechando este debate instalado por la oposición, nos dijeron que una cosa es la estabilidad legislativa o la estabilidad del empleado público, que es aquella de la que gozan hoy los miembros del Ministerio Público, y otra cosa es la estabilidad de los magistrados, que surge del acuerdo senatorial.

El nuevo rango institucional del Ministerio Público justifica la necesidad de un respaldo institucional a través del acuerdo del Senado, porque si no, tal vez, desde el punto de vista funcional, implicaba colocar al fiscal y al defensor en una situación hasta de *capitis diminutio* frente al magistrado. Si bien ambos tienen estabilidad, uno es designado por resolución del señor ministro de Justicia y el otro lo es por acuerdo institucional del Senado de la Nación. Comenzamos a debatir en qué consistía la estabilidad de los magistrados y las diferencias con los miembros del Ministerio Público. Y, frente a esa discusión, surgió la pregunta de cuál era la naturaleza jurídica de la estabilidad del empleado público, que es aquella de la que gozan los actuales miembros de dicha estructura. En esta cuestión de la estabilidad del empleado público la doctrina se divide en dos aspectos.

Por un lado, el de la estabilidad propia; es decir, aquella según la cual quien fuera removido debía reintegrarse inmediatamente a sus funciones y, por el otro, el de la estabilidad impropia; o sea, aquella según la cual el ser removido únicamente generaba la indemnización pero no la reposición en sus funciones, que era la reparación del daño.

En esta última tesis, que es en definitiva la que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que aparentemente adoptó el anterior gobierno constitucional cuando removió por resolución ministerial a los fiscales sin previo sumario, se inscriben autores como Diez, Gordillo o Marienhoff.

¿Cuál es la diferencia entre la estabilidad de los jueces y la de los fiscales y defensores frente a la jerarquización y el nuevo rango institucional que damos al Ministerio Público según el proyecto en consideración? Es el derecho a ser mantenido en sus funciones mientras dure su buena conducta y también a mantener la sede; es decir, el derecho a ejercer su función ante un tribunal determinado. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento expreso y previo. Además, una vez prestado el acuerdo

respectivo, no pueden ser removidos sino a través del mecanismo de enjuiciamiento previsto en el procedimiento constitucional. Es decir, lo que se llama el jurado de enjuiciamiento para los magistrados y que, obviamente a partir de esta norma, también se aplicará a los miembros del Ministerio Público.

La garantía de estabilidad de la que gozan los magistrados también abarcará a los miembros del Ministerio Público cuando se enfrenten a la jubilación o a retiros compulsivos, por cuanto se requiere el acuerdo previo del fiscal y del defensor.

Por último —y es lo más importante—, en caso de ser removidos indebidamente por un procedimiento que no sea el establecido en la futura ley deberán ser restituidos inmediatamente en su cargo y el funcionario que prestó su consentimiento para la remoción irregular generará sobre sí las responsabilidades penales y administrativas del caso. Esta es la gran diferencia.

Sobre estos aspectos profundos giraron los debates que hemos llevado adelante. Sin embargo, debo reconocer que aparecieron otros problemas, como ciertas acusaciones injustas por parte de la oposición, aunque basadas más en un desconocimiento de la realidad que en otra cosa.

Se nos decía, por ejemplo, que el justicialismo buscaba, a través del acuerdo senatorial, remover algunos fiscales que nos eran molestos para poner otros propios.

Señor presidente: hicimos un trabajo consistente en un estudio de campo de los actuales miembros del Ministerio Público, tanto defensores como fiscales. Y más del 70 por ciento de los actuales miembros del Ministerio Público fue designado por este gobierno. Entonces, podemos decir que si lo que buscábamos era la estabilidad de los funcionarios que nosotros nombramos, lo peor que podíamos hacer era ponerlos virtualmente en estado de comisión y remitir sus designaciones para el acuerdo del Senado.

En este caso, agradecemos profundamente la lucha por la estabilidad de los fiscales designados por este gobierno que han llevado a cabo los amigos de la oposición; es algo que agradecemos profundamente.

Señor presidente: además de este debate doctrinario, nos preocupaban algunos problemas que fueron surgiendo a raíz de la postergación de la sanción de esta norma.

Por ejemplo, tomó estado público el caso del fiscal Hermelo, que fue empleado de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.

Aquí, si preguntáramos cuáles eran las funciones del fiscal que actuó en la Escuela de Mecánica de la

Armada, campo de concentración reconocido —si lo hay— de la época de la última dictadura militar, estaríamos en presencia de alguna de las paradojas que plantea la democracia.

Digo esto porque la función de esa persona era la de fiscal penal y dentro de sus obligaciones estaban —por ejemplo— la de controlar el respeto de las garantías constitucionales, los tratados internacionales, el trato otorgado a los condenados en las cárceles, el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por todos los tribunales de Justicia del país, colaborando en la reinserción de los condenados, dictaminando en todos los asuntos que conciernen a la ejecución de las medidas privativas de la libertad, medidas de seguridad, multas, y opinando también en orden a la recuperación de la libertad de los condenados.

Obviamente, esta persona debió haber acumulado alguna experiencia en la ESMA para ejercer la función que hoy desempeña.

Este tipo de problemas comenzó a preocupar a los integrantes de nuestro bloque a raíz, reitero, de debates de carácter doctrinario.

También tenemos, ya en el marco de otro tipo de discusiones, el caso de Damonte, fiscal en lo Criminal y Correccional, el llamado “fiscal trucho”.

Estos y otros asuntos fueron objeto de preocupación en nuestro bloque. Pero estas situaciones no abarcaban a la totalidad de los miembros del ministerio fiscal.

Si consultamos los diarios de sesiones correspondientes a las reuniones donde se informó acerca de este proyecto en oportunidad de la sanción originaria del Senado, podrá apreciarse que sostuvimos que el requisito del acuerdo no podía ser motivo para un trato discrecional y arbitrario por parte de esta Cámara, sino que era absolutamente selectivo y de respaldo institucional. Así, el Senado no podía negar un acuerdo a los actuales miembros del ministerio sin fundamento.

Esto quiere decir que, con nuestra posición, buscamos la legitimación institucional y también revisar este tipo de casos que, obviamente, hieren la conciencia y la moral media de la sociedad argentina.

Pero todas estas cuestiones sobre las que podríamos haber debatido con los amigos de la oposición profundamente y con honestidad intelectual fueron desvirtuadas por la política barata; por esa política que no le sirve al país; por la política opositora por la oposición misma; por esa actividad parlamentaria que mira más a Pasos Perdidos con las conferencias de prensa que a la acción legislativa cotidiana de trabajo, de estudio, de dedicación y de consulta.

Entonces, podemos decir que se ha desvirtuado totalmente el sentido de este debate.

Así, este proyecto quedó pendiente de tratamiento durante un año por no contar con los mecanismos adecuados a efectos de conversar sobre el tema para que, en definitiva, se concretara la iniciativa del justicialismo con la cual, después de 150 años, la Nación contaría finalmente con una ley orgánica de Ministerio Público.

Por supuesto, en el camino quedaron cuestiones de fondo. Por ejemplo, que el Ministerio Público, además de ser un órgano extra poder, a partir de esta norma no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Judicial, ni tampoco su cabeza es el procurador fiscal, sino que es bicefalo, de acuerdo con la nueva Constitución, ya que tenemos al procurador y al defensor general.

Tienen la estabilidad de los magistrados; son designados por concursos de oposición y antecedentes y con previo acuerdo del Senado; en el caso de las cabezas, con acuerdo de los dos tercios del Senado y en el caso del resto de los integrantes del Ministerio Público, por mayoría simple del Senado, previo concurso, reitero.

Serán removidos, también, a través de un mecanismo de enjuiciamiento. Gozan, como decía anteriormente, de la estabilidad de los magistrados y tienen autonomía de funcionamiento, lo que significa el paso más importante con miras a la independencia de la Justicia en la Argentina; inclusive me animaría a decir que esto tiene una importancia mayor que la propia creación del Consejo de la Magistratura. Porque los dueños de la acción penal, los que ejercen la acción penal en representación de la sociedad, pasan a tener absoluta autonomía.

Reitero que ése es el paso más importante —creo yo— que estamos dando con miras a la consolidación de la Justicia.

Señor presidente: a pesar de todas las dudas que nosotros tenemos y que no fueron zanjadas por las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, debemos ser absolutamente justos: salvo por el tema de la estabilidad de los miembros actuales del Ministerio Público —y en cuanto a ello, estoy seguro de que se contó con una mala información respecto de los tiempos de designación de los actuales miembros por parte de la oposición, y eso fue lo que justificó dar a este tema un tratamiento institucional—, la Cámara de Diputados respetó absolutamente el proyecto y la sanción originales del Senado.

Se introdujeron modificaciones —quizás atinadas, algunas— referidas a cargos de la estructura que, en la sanción del Senado, habían quedado olvidados o

no se habían tenido en cuenta y fueron incorporados por la sanción de Diputados.

Existe, además, alguna discusión en torno del artículo 12 de la presente norma. La sanción de Diputados crea en materia de remuneraciones una categoría intermedia de defensores ante la Corte, que percibirían un 20 por ciento más de sueldo que los jueces de cámara, que constituyen la equivalencia de los defensores.

La sanción del Senado trataba de equiparar en todos los rangos a los miembros del Ministerio Público con los miembros del Poder Judicial, y la Cámara de Diputados creó en materia de remuneraciones esta nueva categoría, con lo que se plantearía un problema respecto de cinco funcionarios o magistrados, para definirlos correctamente, del Ministerio Público; ellos estarían involucrados en esta cuestión.

No obstante, eso no hace al contexto de la norma, razón por la cual no tiene sentido insistir en una votación.

Pero reitero que la Cámara de Diputados receptó absolutamente todo lo concerniente a la autonomía, al nuevo status, al mecanismo de designación, a las funciones.

En síntesis, y con perdón por ser reiterativo, la oposición hizo un trabajo destinado a Pasos Perdidos pero no al texto de la norma ni tampoco mirando al Ministerio Público, sino que lo hizo con miras a las conferencias de prensa que allí se brindan y que cotidianamente atraen la atención de la opinión pública, pero ello no altera en absoluto el contenido del proyecto de ley.

Volvemos, entonces, al tratamiento en el Senado, donde injustificadamente está demorado el tema debido a la reiteración de un comportamiento —lo digo con absoluto respeto y también con afecto— de los amigos de la Alianza, de una conducta legislativa que reniega del rol legislativo: trasladaron la responsabilidad de legislar a la Cámara de Diputados; entonces, todo lo que viene de dicha Cámara se vota a libro cerrado, absolutamente todo. Recurrentemente lo escuchamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el resto de las comisiones. Votamos tal como viene de Diputados, no aceptamos ninguna modificación. Un traslado absoluto de responsabilidad legislativa.

**Sr. Presidente.** — Señor senador: el señor senador por Santa Fe le solicita una interrupción.

**Sr. Yoma.** — Con todo gusto.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Usandizaga.** — Señor presidente: solicito una interrupción, que por supuesto agradezco al señor senador por La Rioja, porque en el comentario que

hace falta a la verdad, por lo menos, en lo que a mí respecta.

No es cierto lo que menciona el señor senador por La Rioja respecto de la postura de los integrantes de la Unión Cívica Radical en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si el señor presidente tiene la gentileza de mirar el dictamen de la comisión, verá que no está mi firma.

En más de una oportunidad he manifestado que no comparto la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional que hace la Comisión de Asuntos Constitucionales. Que no comparto la interpretación que de ese artículo de la Constitución han acordado —así me dicen— los presidentes de ambas cámaras. Creo que incluso este despacho se aparta del artículo 81 de la Constitución Nacional, que es claro y expreso.

Por supuesto que respeto la opinión de los demás. Pero estimo —porque así lo dice el artículo 81— que el Senado de la Nación, como cámara de origen, no puede hacer adiciones ni correcciones a la sanción que viene de la Cámara de Diputados. Tenemos que limitarnos —por supuesto es mi opinión y a mi juicio es lo que dice el artículo 81 con una claridad meridiana— a aceptar por mayoría absoluta esas adiciones o correcciones que ha hecho la cámara revisora, o en caso contrario, con los dos tercios, insistir con nuestro despacho originario. Lo que no podemos hacer es lo que hemos hecho en esta oportunidad: introducir otras adiciones o correcciones, porque está claramente vedado por la Constitución Nacional.

Si esto ha sido un error que se cometió en la Convención Nacional Constituyente, es harina de otro costal. Aclaro que en esta posición estoy solo —no he firmado el despacho— y lo he discutido no una, sino varias veces en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reitero que de ninguna manera pretendo ser el dueño de la verdad; respeto la opinión de los demás. Pero no le puedo permitir al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que diga que lo único que nosotros hacemos es trasladar siempre estos temas a la Cámara de Diputados y que ellos legislan. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución, salvo —como ella lo establece— que logremos los dos tercios para insistir con nuestra propuesta original.

Recientemente me han traído —doy mi palabra de que no lo conocía— el comentario que acerca del artículo 81 de la Constitución hace Quiroga Lavié, que fue convencional constituyente y, además, es constitucionalista. Mi opinión encuentra amplio sustento en la suya. Sobre este tema consulté la opinión del doctor Sagües, que es profesor de derecho, y coincidiendo con la interpretación que hace. Por lo tanto, la

mía es una interpretación que de ninguna manera merece la descalificación del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que, de algún modo, es una falta de respeto.

Me he extendido en demasía. Pido disculpas al señor senador y, por supuesto, a la Presidencia. Pero quiero aclarar que de ninguna manera pretendemos —por lo menos quien habla— evadir la responsabilidad que nos cabe como senadores.

Creo sinceramente que tenemos sólo estas alternativas: aceptamos lo que dice la Cámara de Diputados o lo rechazamos con la mayoría especial que exige el artículo 81 de la Constitución. Esta es mi opinión, aunque por supuesto respeto las de los demás.

**Sr. Presidente.** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: es cierto lo que plantea el señor senador por Santa Fe. El, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostiene esta tesis: cuando un proyecto viene de la Cámara de Diputados en segunda revisión y está aprobado con mayoría calificada de dos tercios, lo único que le cabe al Senado es aprobarlo insistiendo con los dos tercios de la totalidad o aceptar las modificaciones; no puede hacerlo de manera parcial.

Obviamente, ésta es una discusión que ya ha sido zanjada por este cuerpo. Los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados hace bastante tiempo emitieron una resolución a través de la cual se establece que la cámara de origen puede insistir total o parcialmente en su sanción.

La postura señalada merece el más alto de los respetos desde el punto de vista jurídico, pero desde el práctico ésta es una discusión —repito— que el Congreso nacional ya ha zanjado.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: no puedo dejar de intervenir en este debate respecto de si estamos actuando bien o mal de conformidad con lo que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.

Por supuesto, respeto todas las opiniones, pero desde mi punto de vista no cabe la menor duda de que en el trámite de sanción lo que se busca es sancionar la mejor ley posible y que refleje la opinión mayoritaria de los miembros de ambas Cámaras.

Si diésemos por cierto que no se pueden aceptar algunas correcciones e insistir en otras, estaríamos abdicando del principio de que con el pase y la vuelta de una cámara a otra podemos mejorar la ley.

Por si pudiera plantearse alguna duda sobre este particular, me permito hacer la siguiente reflexión. Si la Constitución Nacional ha zanjado en forma clara aquella vieja duda doctrinaria de si se podía vetar



u observar parcialmente o no una sanción del Congreso; si la Constitución acepta la facultad excepcional del Poder Ejecutivo para observar una sanción del Congreso y, en consecuencia, puede vetar parcialmente una ley siempre y cuando esc veto u observación parcial no altere su espíritu, ¿cómo no se va a poder admitir que nosotros, que somos quienes legislamos, podamos hacer las correcciones que consideremos pertinentes con el giro de una Cámara a otra? Si el Poder Ejecutivo puede hacerlo en ejercicio de una facultad excepcional, ¿cómo no vamos a poder aceptar nosotros lo que creemos que está bien corregido e insistir en lo que creemos que está mal modificado?

Por eso, quiero dejar sentado que la interpretación conjunta que han hecho los presidentes de ambas cámaras es la que mejor se ajusta al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. Otra interpretación sería insistir en un rigorismo sacramental que no tiene nada que ver con lo que quiere la Carta Magna, es decir que sancionemos las mejores leyes y que reflejen acabadamente el espíritu mayoritario de ambas cámaras del Congreso de la Nación.

**Sr. Presidente.** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: es cierto lo que plantea el señor senador Menem respecto de lo que pasará con el trámite de las normas si se aplicara la interpretación del señor senador Usandizaga. Es evidente que de no construirse una mayoría de dos tercios las leyes quedarían absolutamente obstruidas en su tratamiento, no habría leyes en la Nación. La Cámara no podría sesionar hasta tanto se construyese la mayoría de dos tercios que implique que el Senado insiste en su sanción originaria.

Con la interpretación que pretende el señor senador Usandizaga, a diferencia de lo que establece la nueva norma constitucional aprobada en Santa Fe sobre el trámite de sanción y formación de las leyes, lejos de buscarse la celeridad en el trámite de sanción de las leyes se estaría haciendo todo lo contrario: quedaría estancado el tratamiento de las leyes de la Nación.

Por esto, respetando jurídicamente la postura del señor senador Usandizaga, creo que esta discusión ha sido zanjada por los presidentes de ambas Cámaras y es la interpretación correcta.

De todos modos, cuando me refiero a la conducta de resignar los roles opositor y legislativo, inclusive hasta el propio mandato que tenemos los legisladores, y trasladárselos a la Cámara de Diputados, que es lo que cotidianamente hace la oposición, no lo digo porque se trate de una interpretación reglamentaria que hace el bloque de la Alianza, sino de una actitud política, hasta con cierta comodidad funcional. Ocu-

rre que les es mucho más cómodo trasladar las posturas políticas a las conferencias de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, que quizás —y se demostró— generen votos. Generan más votos las conferencias de prensa que el trabajo en comisión. Pero no sé si la claudicación de ese rol opositor, de la actitud y del comportamiento en la legislación generan la tranquilidad de estar cumpliendo cabalmente con el mandato del pueblo.

Entonces, como consecuencia de esa actitud, esta ley no ha sido sancionada antes y no pudimos debatirla, ya que ante cada insinuación de poner en tratamiento el tema, la respuesta era que se votaba sin modificar una coma lo que había venido de la Cámara de Diputados. Esto nos sucede con todas las leyes importantes, con todas las leyes que plantea la nueva Constitución.

Hemos seguido la conferencia de Fernández Meijide y de Chacho Alvarez por Crónica TV o TN y nos quedamos con eso. Es más, se puede avisar al señor intendente De la Rúa —en esta competencia entre el Frepaso y el radicalismo para ver quién propone con más dureza una actitud opositora frente al gobierno del presidente Menem—, que propuso la creación del cargo de un fiscal especial con carácter eminente y profundamente inquisitivo, que se dirige a indagar cada uno de los papeles que han generado estos diez años de gobierno justicialista. Obviamente fue contestado por el Frepaso creando una súper mega comisión que tiene más poderes y es más inquisitiva que el fiscal que propuso De la Rúa. Hay que ver qué contestan ahora los amigos radicales para responder a esta comisión inquisitiva. Así, hasta que se realice la interna abierta de la Alianza tendremos que ser testigos de este torneo.

En cuanto a este caso del fiscal especial que propone de la Rúa, diré que no hace falta, señor presidente; porque luego de esta ley, con la jerarquía institucional y la autonomía del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas se podrá dar cumplimiento a ese rol, que se pretende adjudicar a este fiscal extraconstitucional que propone crear el radicalismo.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Yoma.** — Lean la ley que vamos a sancionar; que los amigos de la Alianza la lean; que trasladen al candidato de la Rúa el artículo referido a la nueva ubicación institucional y al nuevo rol y jerarquía de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y tendrán en la Constitución el fiscal que están necesitando para investigar todas las veinticuatro

horas de los diez años de gobierno, día por día, que ha llevado a cabo el presidente Menem.

Por eso, respetamos la actitud de trasladar a los diputados la responsabilidad de legislar, pero invitamos a los amigos de la oposición a que lean lo que estamos por votar, porque ahí encontrarán las herramientas que están publicitando en las conferencias de prensa que realizan en el Salón de Pasos Perdidos; leyéndolo quizás se ahorren un par de conferencias de prensa.

Señor presidente: quiero aprovechar también esta histórica sesión —y digo histórica, ya que la República ha esperado durante ciento cincuenta años la sanción de la ley de Ministerio Público—, para agradecer profundamente a los miembros del Ministerio Público, tanto al procurador general como al defensor general y al resto de los fiscales y defensores, los aportes invalorable que hicieron y el tremendo trabajo intelectual que aportaron a nuestra comisión y a nuestro bloque para que hoy contemos con esta iniciativa.

Asimismo, quiero decir que a partir de ahora nunca más habrá resoluciones ministeriales que dejen cesantes a quienes ejercen la acción penal en representación de la sociedad. En efecto, nunca más un ministro de Justicia del gobierno de turno podrá dejar cesante sin sumario —y quizá sin la debida indemnización— a quien representa a la sociedad en la persecución del delito.

Por otro lado —y digo esto con absoluta sinceridad, porque no sé qué ocurrirá con el artículo 70 en el momento de la votación, ya que por las razones que manifesté anteriormente hay muchos compañeros que me hicieron llegar profundas críticas sobre el tema—, quiero poner de relieve la voluntad política de nuestro bloque de no dilatar más el tratamiento de esta iniciativa y de venir a este recinto a suerte y verdad, porque en definitiva, reitero, no sabemos si conseguiremos los dos tercios de los votos para que el artículo 70 sea aprobado de acuerdo con la redacción propuesta por el Senado y no con la de la Cámara de Diputados.

A su vez, quiero decirles al procurador general de la Nación, que hoy nos está acompañando, y al defensor general de la Nación, que los casos como el del fiscal de la ESMA —al igual que otros más que puedan existir— deben ser tenidos en cuenta y que si a partir de hoy todos los miembros del Ministerio Público cuentan con estabilidad, debe comenzar la etapa de los sumarios y la revisión de las conductas que todos tuvimos durante las épocas negras que vivió la sociedad argentina, a fin de que no haya premios sino castigos para quienes no actuaron de manera decorosa o comprometida con los ideales democráticos, que hoy sí tenemos que defender.

Por último, y poniendo de manifiesto la profunda alegría que tengo, felicito al bloque justicialista y a mi partido, autor de esta iniciativa, y voy a solicitar la aprobación del dictamen que está en consideración.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: por expresa delegación voy a hacer uso de la palabra en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical y del Frepaso, es decir, de la Alianza, con la salvedad hecha por el señor senador Usandizaga, no en cuanto al contenido del proyecto de ley sino vinculada a una cuestión interpretativa del artículo 81, que creo que vale la pena tenerlo en cuenta, porque varias veces conversamos sobre el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

A este respecto cabe señalar que yo coincidí en que este artículo 81 fue hecho para acelerar el tratamiento de las leyes y no para demorarlo, pero no me termina de cerrar el hecho de que la interpretación de esta norma deba ser realizada a través de una resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras, ya que se me ocurre que lo razonable, a fin de tener una mayor perdurabilidad en el tiempo, sería que fuese reglamentado a través de una ley.

Pero en definitiva ésta es una discusión que queda pendiente y constituye un tema que debemos resolver. De todas maneras, reitero, hasta ahora coincidí con la interpretación mayoritaria que se le ha dado a este artículo 81, en el sentido de que su objetivo es acelerar el tratamiento de las leyes. Además, y obviamente que respeto las demás opiniones, entiendo que la sana hermenéutica de la reforma de la Constitución nos lleva a la interpretación que acabo de señalar.

Recién escuché las calificaciones que el miembro informante hacía de esta sesión, sesión histórica: estuvimos ciento cincuenta años esperándola. Y me parecía que estaba acertando en esas calificaciones.

Sin embargo, cuando lo escuché hablar tres o cuatro veces de Pasos Perdidos y de campañas electorales, pensé que estábamos saliendo de la historia para entrar en las chicanas. Me parece que estamos bardeando este tema, que es realmente importante. Diría que fue uno de los grandes temas que se introdujo en el sistema de pesos y contrapesos instaurado por la reforma de la Constitución de 1994. A tal punto que no puedo dejar de recordar la oportunidad en que se sancionó este artículo 120, en una de las últimas sesiones de la Convención Constituyente. En esa ocasión, el entonces presidente de nuestro bloque, el doctor Alfonsín, dijo: “Bueno, ya está. Ya hemos logrado uno de los objetivos principales que se había

propuesto la Unión Cívica Radical en la reforma del 94".

Es decir, la creación de este instituto: el Ministerio Público fiscal como organismo extrapoder, definición que desde el punto de vista terminológico no satisfacía a todos, pero que quería explicar, en términos concretos, que se limitaba el presidencialismo en las facultades que tenía para poder inclinar la Justicia en determinadas direcciones a través de los fiscales.

Creo que el brillante discurso que en aquella Convención realizó el miembro informante de nuestra bancada, el doctor Jorge de la Rúa, abonó con argumentos científicos y técnicos la conveniencia y la imprescindible necesidad de crear un instituto como el que estábamos sancionando.

Por eso, llegar hoy finalmente—después de casi cuatro años—, a sancionar la ley que pone en funcionamiento efectivo al Ministerio Público fiscal como organismo extrapoder independiente, de los tres poderes en los términos en que la Constitución lo creó, realmente tiene que ser motivo de satisfacción y orgullo. No debe ser motivo de bastardeo, de chicanas ni de nada de eso.

Si no respetan a la oposición, por lo menos respeten a los propios diputados justicialistas que aprobaron esta sanción, que seguramente son parecidos a los justicialistas del Senado, y a los radicales de ambas Cámaras, que tienen preocupaciones comunes, que analizaron también este artículo 70, que fue uno de los que provocó discrepancias. Seguramente, en la evaluación de los acuerdos generales a todos, con los errores e injusticias que en algún caso particular podrían llegar a cometerse, frente al hecho de terminar con esa espada de Damocles que pesaba sobre todos los fiscales del país, optaron por terminar con ella, aun teniendo que absorber o asimilar alguna situación que no fuera absolutamente la que hubiéramos querido.

Pero como en todo en la vida, hay que optar entre superiores beneficios o perjuicios. Nada es blanco o negro. Todos son tonos en los cuales a veces hay que sacrificar algo para salvar lo más. Pensaron que salvar lo más era dar estabilidad a los actuales fiscales, y así lo pensamos nosotros; así lo reafirmamos.

Creo que la naturaleza y la importancia del instituto que estamos reglamentando a través de esta ley, que creó la Constitución reformada en 1994, así lo exigía, porque fue uno de los grandes reclamos que vinieron desde abajo, bien desde abajo. Es más, si hay un tema que los constituyentes recogieron en la opinión pública general de todo el país, y diría inclusive fuera de él, era la necesidad de mejorar la independencia del Poder Judicial y de todos los órganos que, de algún modo, tienen que ver con la

administración de justicia. Y creo que fue debidamente recogido.

Por supuesto, en la instrumentación podemos tener objeciones, discrepancias, puntos de vista parciales diferentes. Pero en lo conceptual o general, estamos de acuerdo. Y creo que el país se va a alegrar cuando se entere de que hemos sancionado esta ley. Y también se va a alegrar nuestro amigo Alfonsín. Creo que el mejor regalo de cumpleaños que le podemos hacer para el día de mañana es que se entere de que este proyecto ha sido finalmente sancionado, con grandeza, altura y respeto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque autonomista.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: este proyecto, que hoy nos toca analizar por segunda vez, el del Ministerio Público, que fue introducido por la reforma constitucional de 1994, en el artículo 120, sin duda alguna es de enorme importancia y de gran trascendencia. Y, sobre todo, tenemos que reconocer en este aspecto que el pueblo argentino está deseoso de que esto se convierta en ley, que se pueda plantear de esta manera la seguridad jurídica, el sistema republicano de gobierno y sostener las instituciones que la Constitución establece.

Por eso, señor presidente, creo que, sin lugar a dudas, estos controles integran el elemento esencial de esa teoría de la división de poderes y del sistema republicano, que se constituyen en el mejor resguardo de los derechos y garantías para los habitantes de la Nación. De ahí el clamor, el reclamo y la preocupación, de ahí la necesidad que plantean los compatriotas a efectos de que nuestro Congreso sancione hoy esta ley que, sin duda alguna, tiene tremenda importancia.

Como varios señores senadores van a hacer uso de la palabra y, además, queremos que esto quede sancionado hoy para el bien de todos, quiero simplemente fijar mi posición y pedir la inserción del resto de mi exposición, que es un poco extensa. Asimismo, deseo agregar que el bloque autonomista que representará por la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público conforme las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente: el proyecto que hoy nos toca analizar por segunda vez, luego de la revisión producida por la Cámara baja, tiene por objeto cumplir lo dispuesto por la Constitución Nacional en su reciente reforma de 1994, que estableció en el artículo 120 la constitucionalización del instituto del Ministerio Público como un órgano extrapoder.

Este proyecto —próximo a convertirse en ley— contiene enorme trascendencia institucional por la importancia de la temática que aborda su tratamiento.

Una de las preocupaciones más evidentes de la sociedad, y de toda su dirigencia, se centra en el cumplimiento y fortalecimiento de los controles que nuestro sistema institucional ha dispuesto sobre los poderes públicos.

Dichos controles integran el elemento esencial de la teoría de división de poderes que rige el sistema republicano, y se constituyen en el mejor resguardo de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación.

Es irrefutable la realidad que indica que muchos sectores de nuestra comunidad reiteradamente han advertido con preocupación el incremento del poder que la administración actual fue progresivamente incorporando, al precio de usurpar en muchos casos competencias constitucionales y legales de otros poderes del Estado; de modificar estructuras de organismos de control, debilitando sus metas y funciones, y de ignorar sanas costumbres republicanas nacidas para evitar el predominio de alguno de los tres poderes del Estado.

En esta línea de pensamiento, el Poder Judicial no se mantuvo al margen de la centralización del Ejecutivo que, en su momento, asestó un golpe importante contra su independencia al promover y obtener el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al sostener la doctrina minoritaria que ubica al Ministerio Público bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, en contra de aquellas posiciones que lo visualizan dentro de la órbita del Judicial o como órgano extrapoder, posición finalmente adoptada por nuestra Carta Magna a partir de su última reforma.

Como sostuve en la Constituyente de 1994, la posición que reúne mayores adhesiones —y a la que personalmente adhiero— es la que lo sitúa dentro del Poder Judicial constituyendo una de sus ramas, pero dotando a sus titulares de suficientes facultades y autonomía.

Los argumentos aportados por los autores que propiciaron que el Ministerio Público debía constituir un órgano extrapoder se centraron fundamentalmente en respetar su independencia.

Si bien compartí siempre dicha preocupación, discrepo con ellos por lo siguiente. La independencia necesaria hubiese podido alcanzarse igualmente dotando de autonomía al órgano dentro del Poder Judicial. La estructuración como órgano extrapoder, a pesar de lo seductora de la teoría, tropieza a mi criterio con la dificultad de que importa alterar la larguísima tradición occidental de la trilogía de poderes porque, quierase o no, al sacarlos de las estructuras de los otros, se lo ha convertido en un "cuasi poder" con facultad de control, resultando, como ha sucedido, más compleja su inserción en el esquema constitucional, por traspolarse una conceptualización que cierta doctrina utiliza para ubicar al rey en Inglaterra o al presidente en Francia, donde se encuentran separadas las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado.

Esta postura, adoptada —reitero— finalmente por la reforma, encierra importantes dificultades que atentan contra la precisión y fundamentalmente la eficacia del instituto. Repárese únicamente, y sólo a título de ejemplo, en los aspectos económicos involucrados en la estructuración.

Un órgano extrapoder siempre va a encontrarse frente a los otros tres poderes, especialmente respecto al Poder Ejecutivo, en inferioridad de condiciones.

Finalmente, y esto es esencial, por la propia naturaleza de la institución, el lugar correcto para instalarlo hubiera sido el Poder Judicial. Ello es así porque la función judicial del Estado considerada sustancialmente, no es ejercida tan sólo

por el juzgador, aunque éste tenga el máximo poder decisorio que en el área procesal caracteriza a la jurisdicción, sino también por el Ministerio Público en cuanto coadyuva a la obra de administrar justicia.

Es un desdoblamiento que obedece a la necesidad de proveer a la defensa oportuna y adecuada de las personas que no cuentan con la posibilidad de ser defendidas, de la sociedad en general o de los incapaces y menores.

El artículo 120 de la Constitución Nacional establece claramente que el Ministerio Público es un órgano independiente, desvinculado de los poderes Ejecutivo y Judicial. En ese sentido, corresponde partir de la premisa de que el Ministerio Público es un órgano esencial del estado de derecho. Por ello, se exige que en el cumplimiento de sus funciones exista adecuada imparcialidad e independencia.

Además, la posibilidad de asegurar la defensa del justiciable con el más adecuado servicio de justicia tiene que obedecer a otro principio rector, cual es que el funcionario debe tener las garantías necesarias que aseguren su imparcialidad. Entre ellas, se enumeran en forma taxativa la inmunidad funcional y la intangibilidad de las remuneraciones. El segundo aspecto fue el de asegurar la autonomía funcional. Con ese objeto se otorgó autarquía financiera e independencia funcional.

Al hacer referencia a la independencia, estoy aludiendo a una institución organizada, de tal manera que esté al margen de cualquier tipo de indicaciones, presiones u órdenes de cualquier otra autoridad.

En definitiva, el Ministerio Público debe ser imparcial y, por ello, independiente. Requiere, para ese cometido, de la inamovilidad e inmunidad de sus integrantes, además de la intangibilidad de las retribuciones.

Los caracteres citados no bastan; es necesario que tenga también una organización y una estructura que le permitan una actuación eficaz. Esta organización y estructura han sido analizadas en distintos momentos y foros. Existe un denominador común que indica la necesidad de una disposición jerárquica del órgano.

La imparcialidad debe ser visualizada como la actitud de permanente y absoluto acatamiento al principio de legalidad, que no debe sufrir excepciones por el hecho de tener en cuenta quién es el destinatario de la norma.

Ahora bien, pilar de esa imparcialidad debe ser la independencia. Así lo entiende Teixidor, quien sostiene que la imparcialidad en el ejercicio de las competencias sólo se logra con independencia. En otras palabras, si se quiere un Ministerio Público imparcial la única manera de obtenerlo es que se lo establezca como independiente.

Asimismo, el artículo 120 de la nueva Constitución delimitó las funciones primordiales: a) promover la actuación de la Justicia; es decir, se trata de un órgano destinado a asegurar la permanencia del servicio de justicia; b) defender la legalidad, y c) lo que es muy importante, los intereses generales de la sociedad.

Es interesante hacer referencia al importante debate que tuvo lugar en la Comisión de Sistemas de Control de la Constituyente, donde existió consenso sobre cuáles serían los extremos de esta función. Así por ejemplo, se indicó que debía tutelar la ética pública y atacar las manifestaciones delictivas que ponen en entredicho la credibilidad del sistema democrático, tal como lo hace con claridad la Constitución colombiana.

El artículo 120 de la Constitución Nacional establece como garantías la inmunidad funcional a imagen y semejanza de la que posee el defensor del pueblo, y la intangibilidad de las remuneraciones, como ocurre con los jueces. A este respecto se agrega que las funciones que se desempeñen tendrán que ser efectuadas en coordinación con las demás autoridades de la República.

A partir de la fórmula sintética y amplia del artículo 120 de la Constitución Nacional, muy similar al artículo 124 de la Constitución española que regula el Ministerio Público en dicho país, la organización fue defendida a una ley futura, precisamente la que hoy consideramos

Es dable reconocer que la ley reglamentaria que estamos debatiendo ha logrado un consenso digno de destacar, tanto cuando fue aprobada en esta Cámara como cuando la revisora le introdujo algunas modificaciones.

Y creo que lo dicho debe ser remarcable ante los ojos de la opinión pública por dos circunstancias, la primera por el hecho que nos encontramos ante una de las instituciones más complejas desde el punto de vista del derecho positivo (que incluso llevó a que un gran procesalista como Jofré la calificara como la quinta rueda de la carreta de la justicia) por lo que resulta muy difícil su conceptualización y esto se ha logrado satisfactoriamente; la segunda por la evidencia de una voluntad de trabajo y de consenso digno de remarcar, en momentos en que desde muchos sectores se ataca al Poder Legislativo bajo argumentos que pretenden denunciar supuesta inactividad y que en su ámbito se privilegian intereses personales y políticos de sus integrantes por sobre los de la comunidad.

El proyecto en su contenido refleja con fidelidad la letra y el espíritu que emana del artículo 120 de la Constitución.

Las pocas disidencias que en su momento me inspiró el dictamen de las comisiones del Senado han sido enteramente satisfechas por las modificaciones introducidas por Diputados.

Siempre he dicho que el Congreso debe ejercer plenamente las facultades que constitucionalmente hacen a su competencia, sancionando normas que permitan mantener y ejercer los controles que apuntalan el sistema republicano.

Bajo el convencimiento de que la aprobación de este proyecto cumple acabadamente con dicho objetivo, el Bloque Autonomista que represento votará por la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público conforme las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba del bloque Justicialista.

**Sr. De la Sota.** — Señor presidente: creo en la autonomía del Ministerio Público y, por eso, voy a votar afirmativamente en general la sanción de Diputados que estamos considerando.

Creo en la autarquía económica y financiera del Ministerio Público y, por eso, voy a apoyar en general el dictamen que estamos considerando.

Creo en la estabilidad y en el carácter vitalicio de los miembros del Ministerio Público y por ello voy a votar en general positivamente el dictamen que está en consideración.

Creo en las inmunidades que los miembros del Ministerio Público deben tener para poder ejercer sus

funciones con plena libertad, sin presiones ni condicionamientos del poder político, ni de las corporaciones o los intereses sectoriales de la sociedad. Y por eso voy a votar afirmativamente en general el proyecto que estamos tratando.

Creo, también, señor presidente, en la honestidad y en la capacidad de la inmensa mayoría de los magistrados del Ministerio Público del país. Y por eso adelanto mi voto negativo en particular al artículo 70 del proyecto que está a consideración de esta Honorable Cámara.

Y algunos se preguntarán por qué. Porque creo que los miembros del Ministerio Público no se merecen no contar con el acuerdo individual, para cada uno de ellos, de este Senado de la Nación.

Es tan importante la función del Ministerio Público que en países con larga tradición democrática se elige a los miembros del Ministerio Público por el voto popular, como ocurre en los Estados Unidos.

Ellos son los encargados de defender a la sociedad de quienes tienen conductas violatorias de las reglas que organizan la vida en común. Ellos son los que tienen que defender nuestros intereses, los de nuestras familias, los de nuestros hijos; nuestras libertades, patrimonios y derechos inalienables como personas. Entonces, merecen estar rodeados de las mayores garantías de intangibilidad en una sociedad que se encuentra en crisis.

Señor presidente: nadie puede negar que en este fin de siglo el divorcio entre los dirigentes y los dirigidos, entre los dirigentes y la sociedad, se acrecienta; y la brecha crece. Esta situación se manifiesta en el desinterés de los ciudadanos por la cosa pública, en la anomia de la sociedad frente a una eterna discusión entre hombres y mujeres de distintas ideas, que más que parecer de distintas ideas parecemos solamente de distintos apetitos de poder. En este marco, el descreimiento y la anomia social también tocan a los miembros del Poder Judicial de la Nación.

He sostenido en este resinto que el siglo pasado ha sido el siglo del Poder Legislativo, que este siglo lamentablemente ha sido el del Poder Ejecutivo, inclusive con sus desviaciones totalitarias, como en el fascismo, el nazismo y el comunismo; y sostengo que el siglo que viene será el siglo del Poder Judicial.

La sociedad valora cada día más la necesidad de mantener la paz social sobre la base de la plena vigencia, respeto y acatamiento de las leyes que cada comunidad se da.

Lamento cuando, por ejemplo, las declaraciones de un señor como Scilingo, que merece el unánime repudio de la sociedad, ponen en tela de juicio y conmocionan al Ministerio Público del país. Yo no sé ni me consta si el fiscal Hermello estuvo cumplien-

do funciones en la ESMA o no; si las cumplió y sabía de las atrocidades que ocurrían allí. Pero no me cabe duda de que las denuncias de un delincuente convicto y confeso como Scilingo ponen en tela de juicio y alteran la credibilidad del Ministerio Público y la confianza de la sociedad en ese órgano que tiene la ineludible tarea de defender los intereses de todos nosotros.

Si sé que los mecanismos de designación de algunos integrantes del Ministerio Público en los últimos años no han sido precisamente los más adecuados. Fijense ustedes los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal Número 1 en la que se condenó al ex fiscal federal Jorge Damonte. Los integrantes de ese poder de la Nación determinaron que los mecanismos de control usados para la designación de los ahora miembros del Ministerio Público no reunían las exigencias apropiadas para el debido control de los postulantes, como si ocurre en la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación.

Fijense ustedes. Pueden existir otros Damontes. Pueden existir otros miembros. Indudablemente podrán decirme que un frasco de tinta no mancha el océano. He afirmado mi creencia en la honestidad y en la eficiencia de la inmensa mayoría de los integrantes del Ministerio Público de la Nación, pero en esta situación de descrédito social un frasco de tinta tiñe buena parte del océano. Es nuestra tarea de legisladores proteger y tutelar la credibilidad de los integrantes del Ministerio Público argentino.

Por ello, señor presidente, adelanto mi voto negativo al artículo 70. No porque me anime una intención inquisidora —y mucho menos politiquera— de escarbar para saber quiénes son los que actualmente ocupan estas importantísimas funciones que el Estado democrático necesita y reclama sean siempre eficientes. Por el contrario, mi interés es distinto: busco proteger y tutelar —rodeando de las mayores garantías— a quienes desempeñan esas funciones. Y la mayor garantía de legitimidad no la dará un artículo que, por única vez, establezca, en bloque, que deban permanecer todos los que actualmente ocupan cargos, aclarando finalmente —diría que casi con vergüenza— que lo dispuesto no impedirá la remoción de dichos funcionarios por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la presente ley. ¡Vaya novedad! Aunque no lo dijera, así sería.

¡Qué bueno sería, señor presidente, que este Ministerio Público autónomo, con autarquía financiera, con estabilidad y carácter vitalicio de sus miembros, con las inmunidades necesarias para cumplir, sin presiones, sus funciones con honestidad y capacidad, pudiera lucir también, en la designación de sus miembros, el acuerdo del Senado de la Nación, como el

máximo organismo de control de esa legitimidad que debe caracterizar a sus funcionarios!

En consecuencia deseo adelantar mi voto afirmativo en general para este proyecto de ley, y mi voto negativo para el artículo 70.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: quiero agradecer, recogiendo algún reconocimiento feliz que se ha expresado al iniciarse este debate, el inestimable aporte que nos han brindado los integrantes del cuerpo de fiscales y defensores del país —a pesar de que a algunos de ellos les comprenden las generales de la ley—, que ha tenido una notable coincidencia con muchas otras opiniones valiosas y esclarecidas que fue admitiendo, por espontánea concurrencia, la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Hombres del foro, magistrados de diversas instancias, profesores, representantes de organismos profesionales, han venido a traer su aporte y a darle valor a la inestimable labor que se realiza en las comisiones legislativas, en donde, por encima de los formalismos, se escucha, se requiere y se discute.

Por ello, hemos hecho una labor que considero valiosa y, a través de todas esas opiniones, algunos senadores que partían de un enfoque distinto se han ido persuadiendo de la conveniencia de este instrumento que creía que era el producto de un acto de consenso y que ahora advierto, conforme con lo que se ha expresado por parte del miembro informante de la mayoría, que quizás no lo sea.

Es importante, entonces, que todos y cada uno de nosotros expresemos nuestro pensamiento.

Coincido con lo expresado por el señor senador Yoma cuando se refirió a una histórica sesión. Es difícil no recordar que este tema ha tenido una interpretación muy disímil en el curso de nuestra historia constitucional devenida a partir de la sanción de la Constitución de 1853.

A través de la vigencia sucesiva de leyes y de reformas constitucionales ha venido dándose —en la valoración y calificación que se da a esta institución— una polémica doctrinaria que ha existido y que todavía subsiste. Por un lado están aquellos que forman parte de lo que se podría llamar el sistema judicialista, que estiman que los fiscales forman parte natural del Poder Judicial; y, por el otro, aquellos que por el contrario, quizás por razones históricas —esas mismas razones que ya hemos recordado muchas veces en este Senado, venidas de la tradición histórica de Europa—, no ven al Poder Judicial como un órgano independiente, como lo ha sido a partir de la sanción de la Constitución norteamericana, sino como una rama del poder administrador y por ende también ven a los fiscales como funcionarios ligados a este último sector.

Si analizamos cómo ha ido moviéndose en el curso del tiempo nuestra Constitución, veremos que ella también ha sufrido el impacto de esas discusiones.

La Constitución de 1853 establecía claramente que la Corte Suprema se compondrá de nueve miembros y de un procurador general. Cuando hablaba de los ministros del tribunal y de la existencia dentro de esa corte —y por ende con rango constitucional— de un procurador general, nadie podía dudar de que formaba parte del Poder Judicial.

Luego viene la reforma de 1860, que dispone que la Corte se integrará con nueve miembros y con los demás tribunales que establezca la Constitución.

A partir de ahí empezaron a surgir dudas, las cuales fueron subsanadas por el decreto ley 1.285 de 1958, en el que se establece que la Corte Suprema se compondrá de cinco jueces y de un procurador general. Es decir que aquí tampoco cabían dudas de que ellos formaban parte del Poder Judicial.

En 1973, por ley 20.677, el Congreso suprimió el requisito del acuerdo en todas aquellas designaciones no especificadas por la Constitución; por lo tanto, empezó a dudarse respecto de si los fiscales formaban parte del Poder Judicial.

La ley 23.744 establecía que la Corte Suprema se compone de nueve jueces y decía lo que recordaba el señor senador Yoma: que ante ella actuarán el procurador general y los fiscales. De esto se deducía que no formaban parte de la Corte.

En la práctica también varió el criterio; en algunos casos se llegó a pedir el acuerdo para el nombramiento del procurador general, y por ende, implícitamente, se lo acercó a la esencia del Poder Judicial. Pero hace algunos años se dejó de pedir el acuerdo y a este funcionario se lo nombraba exclusivamente por decreto. Ahí surgió la duda con respecto a la verdadera esencia jurídica de esta institución.

Incluso creo recordar que algunas veces se planteaban interrogantes porque existían dos leyes: la 23.984 (sobre Código Procesal Penal) y la 24.050, que organiza la competencia de los tribunales penales.

Aquí los jueces de instrucción podían delegar atribuciones en los fiscales. Y eso traía la duda sobre si eran o no miembros del Poder Judicial o si se estaba incurriendo en la transgresión constitucional que impide al Poder Ejecutivo arrogarse el conocimiento de las causas judiciales.

Por esta razón, en 1992 presenté en esta Cámara un proyecto sobre el Ministerio Público, en el cual, para evitar dudas, lo consideré como parte integrante del Poder Judicial. Pero, en este largo recorrido, el asunto finalmente es subsanado en 1994 al reformarse la Constitución Nacional.

En efecto, a través del artículo 120 de la mencionada norma se le otorgan al Ministerio Público todas las garantías de estabilidad, de autarquía financiera y otras que ya han sido suficientemente recordadas en el curso de las exposiciones del señor miembro informante del proyecto en consideración y de otros señores senadores.

Señor presidente: no quiero alargar mi exposición, pero si deseo dejar sentada mi coincidencia —en realidad, ya lo hemos discutido en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales— con respecto a la interpretación dada por los presidentes de las cámaras sobre el artículo 81 de la Constitución Nacional; que, vale la pena acotarlo, no fue antojadiza sino que obedeció al criterio mayoritario en las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Y también coincido con la explicación que se ha vertido en el recinto. No podemos embretarnos en el sentido de estar obligados a aceptar *in toto* lo que viene de la otra Cámara, porque ello nos impide mejorar el proyecto de ley cuando somos la Cámara decisoria, como ocurre en el caso que hoy vamos a protagonizar.

Por esta razón, voy a dar mi voto favorable a este proyecto consensuado. Creo que puede hablarse en ese sentido pese a que, como lo manifestara en el debate de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, exista alguna duda frente al artículo 12. No obstante ello, pienso que lo más importante es no dilatar más esta cuestión.

No me quiero meter en el vericuetto de si esto es mérito de un partido o de otro. Para mí éste es un proyecto que beneficiará al país. Hemos llegado a él declinando alguna posición anterior, en algún caso, y, en otros, aceptando modificaciones a la sanción de la Cámara de Diputados. Pero dados la loable coincidencia y el acuerdo de opiniones puestos por encima de toda duda e, incluso, de ciertos cuestionamientos escuchados recientemente, es claro que el objetivo ha sido servir a los intereses generales del país, que, más que nunca, exige estabilidad en sus instituciones. Además, al sancionar esta norma no hacemos otra cosa que recoger el sentimiento claramente mayoritario de la opinión pública en el sentido de cumplir con una obligación legislativa que a todos nos alcanza.

Por esta razón, yendo a lo que ha sido motivo de mayor discusión y divergencia, que es el artículo 70, dejo sentado que votaré el sancionado por la Cámara de Diputados y respetado por el dictamen mayoritario, porque traerá tranquilidad a la familia judicial.

Posiblemente, algunas confirmaciones podrían ser impugnables. Pero, señor presidente, si entramos en el análisis de todos y cada uno de los casos, ingresaremos en un tembladeral jurídico que en nada beneficiará al país.



Es nuestra obligación realizar aportes y ayudar en lo que podamos. Por eso agradezco a los señores senadores que se han apeado de sus posiciones iniciales por pensar primordialmente en el bien del país.

Reitero: aunque algunos casos puedan ser impugnables, considero que haremos un bien a la Nación si le otorgamos a este último segmento de la magistratura la estabilidad necesaria para actuar sin cargos de conciencia, sin temores y al amparo de lo que establece la Constitución Nacional.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos del bloque Justicialista, con quien cerramos la lista de oradores.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: quiero hacer uso de la palabra. Tengo derecho de participar en el debate.

**Sr. Presidente (Menem).** — No estaba anotado en la lista, señor senador.

**Sr. Maglietti.** — Pero quiero hacer uso de la palabra, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Está bien, señor senador.

Esta Presidencia concedió el uso de la palabra al senador que figuraba en la lista como último orador.

**Sr. Maya.** — Preferimos escuchar primero al señor senador por Formosa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Entonces, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** — Me interesaría escuchar primero las manifestaciones del señor presidente del bloque del oficialismo para estar en condiciones de mantener un diálogo constructivo.

Pero si el orden debe ser cambiado, voy a aceptarlo democráticamente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador: quiero aclararle que existe una práctica aceptada en el sentido de que siempre cierran la lista de oradores los señores presidentes de bloque. Si el señor presidente del bloque radical no hace uso de su derecho, es otro asunto.

Reitero: la circunstancia de que siempre cierran la lista de oradores los presidentes de bloque constituye una práctica aceptada.

**Sr. Maglietti.** — Perfecto, señor presidente.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: tenemos el peligro de quedarnos sin quórum.

**Sr. Presidente (Menem).** — Está en uso de la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: creo que esta norma, de fundamental importancia para el país, lógicamente va a cambiar el funcionamiento de nuestras instituciones, tan gravemente afectadas durante estos últimos años.

En el transcurso del debate llevado a cabo en este recinto escuché algunas expresiones que interpreto como injustas para con la oposición. Digo esto porque acusar a los opositores de ser los responsables de la demora en la sanción de esta norma, de que no tenemos demasiado interés en trabajar en nuestras actividades cotidianas, de que más que nada pretendemos participar de las conferencias de prensa, constituyen expresiones que no se ajustan a la realidad ya que los hechos demuestran todo lo contrario.

En primer lugar, debemos reconocer que la creación de instituciones como la que hoy estamos considerando es fruto de la última reforma de la Constitución. De esta manera, la creación de un Ministerio Público con carácter autónomo y la del Consejo de la Magistratura fueron inspiradas por los convencionales de la Unión Cívica Radical, que se preocuparon fundamentalmente por modificar la Constitución para mejorar las instituciones del país.

Quizá algunos miembros de la bancada Justicialista compartieron la misma preocupación; evidentemente, no puedo decir lo contrario. Pero es sabido y reconocido que el principal interés de los señores del oficialismo fue la aprobación del artículo que habilitaba la reelección a nivel presidencial.

Entonces, es indudable que nuestra conducta ha venido marcando una posición clara en defensa de las instituciones republicanas del país.

A través de la última reforma constitucional los radicales pretendimos que la Nación contara con órganos institucionales que, el día de mañana, garanticen gobiernos que no puedan apartarse de los preceptos establecidos por la Constitución y que, de esa manera, constituyan un ejemplo de conducta para el bienestar del pueblo.

Entonces, la sanción de este proyecto de ley sobre Ministerio Público en absoluto fue demorada por la Unión Cívica Radical en general ni por nuestro bloque en particular. Si la sanción de esta norma ha sufrido alguna demora, ello es responsabilidad del justicialismo.

Si nosotros sostuvimos que estábamos de acuerdo con el proyecto de la Cámara de Diputados no lo hicimos porque no queríamos trabajar, sino porque considerábamos que ese proyecto había sido consensuado por todos los bloques y, en consecuencia, aunque podía adolecer de algunos defectos, era preferible aprobarlo tal como estaba redactado a fin de contar cuanto antes con la institución del Ministerio Público.

Aquí se nos acusa de querer demorar la aprobación del proyecto. No son expresiones realistas. Creo que la demora en la sanción del proyecto se debe fundamentalmente a la actitud del oficialismo, porque no se nos puede negar que el oficialismo tenía mayo-



ría suficiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales para producir el dictamen correspondiente cuando lo hubiera querido realizar.

De tal manera que nosotros no aceptamos, desde ningún punto de vista, que existe responsabilidad de nuestra parte; por el contrario, insistimos en que la responsabilidad es del oficialismo, como también lo fue la dilatada demora en la creación del Consejo de la Magistratura, que servirá para fortalecer el día de mañana al Poder Judicial, como también lo hará este Ministerio Público; respecto de eso, creo que coincidimos todos los señores senadores.

En este recinto también se han formulado manifestaciones que me ponen muy feliz, porque veo que muchos senadores están hoy muy preocupados para que el país cuente en el futuro con instituciones que sean una garantía para los ciudadanos.

En la primera oportunidad en que debatimos el tema del Ministerio Público, traje antecedentes —como la encuesta de Gallup— que demostraban que en el país apenas el 11 por ciento de los argentinos confiaba en la Justicia.

En aquel entonces di ejemplos de cómo la Procuración General había pasado a ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo a partir de la asunción de este gobierno, ya que la designación del titular se hizo por decreto y el juramento, ante el Poder Ejecutivo.

He traído todos los ejemplos y también leí algunas expresiones de diarios importantes de este país, que decían que las instituciones judiciales del país no funcionaban con independencia y, en consecuencia, no garantizaban una correcta investigación de la corrupción ni representaban una auténtica defensa de los derechos de los ciudadanos argentinos.

Hoy debo decir en este recinto que estoy contento porque éstos son hechos que corresponden al pasado, porque con esta norma se podrán lograr, paulatinamente por supuesto, las rectificaciones necesarias.

Para que ello ocurra necesitamos que la iniciativa entre en vigencia y para que lo haga de inmediato, lo más lógico hubiera sido que la Cámara de Senadores no incluyera ninguna reforma al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Si fuera mal pensado, tendría que decir que esas reformas al proyecto mencionado fueron introducidas con el objeto de dilatar la aprobación de la iniciativa; pero no me consta y no quiero ser arbitrario.

No obstante, si este Senado hoy aceptara el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, los senadores podríamos aplaudir la sanción definitiva de la norma. Sin embargo, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados como consecuencia de las modificaciones intrascendentes, repito, que se quie-

ren introducir a la sanción de la Cámara baja, donde, por otra parte, también está representado el oficialismo.

He analizado las reformas que se proponen. Realmente, no hay una sola que justifique la modificación de la sanción de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué hacer esas reformas? ¿Cuál es el objeto de que la ley no se apruebe hoy y deba volver a la Cámara de Diputados, dilatándose con ello la sanción de esta norma tan importante y tan esperada por todos los argentinos?

A pesar de ello, creo que los tiempos en el país están cambiando y van a cambiar. Necesariamente, este país, con su democracia todavía en pañales, que recién está naciendo, debe apuntalar sus instituciones; todavía no tenemos instituciones consolidadas. Necesitamos un Poder Judicial verdaderamente independiente, con jueces capaces, que habremos de tener cuando funcione realmente el Consejo de la Magistratura, cuya ley ha sido sancionada pero todavía no se lo ha puesto en funcionamiento; cuando funcione la comisión bicameral que controle los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Hasta hoy, el presidente sigue gobernando al país a través de decretos de necesidad y urgencia, absorbiendo y tomando para sí facultades propias del Poder Legislativo.

El Poder Judicial está muy cuestionado. La Corte Suprema de Justicia no es confiable para nadie. No creo que la Corte Suprema llegue a declarar inconstitucional a la Constitución argentina. Las revistas y diarios, tal vez como simple propaganda periodística, asignan esa posibilidad, pero sería lo más descabellado que pudiera ocurrir en el país. No creo que llegue a pasar. Estaríamos negando todo el derecho argentino y la Corte dejaría de ser el órgano que ampara a la Constitución para transformarse en un órgano político que defiende intereses políticos. Esto es lo peor que le puede pasar a la Nación...

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador: le pido encarecidamente que se circunscriba al tema que estamos debatiendo, que es una sanción que fuera oportunamente discutida y que viene al Senado en segunda revisión.

**Sr. Maglietti.** — Con mucho gusto, señor presidente. Pero quiero decir que interpreto que todo esto está relacionado y que mi propósito no fue apartarme del tema. Como senador de la oposición, pienso que llamarme la atención por este hecho constituye una actitud que no es muy justa...

**Sr. Presidente (Menem).** — No le llamo la atención, señor senador. Me he permitido, con todo respeto, hacerle una sugerencia, teniendo en cuenta que muchas veces, cuando alargamos los debates, nos quedamos sin quórum.

**Sr. Maglietti.** — De acuerdo, señor presidente. Voy a aceptar con mucho gusto su caballerosa actitud. Pero a pesar de lo que el señor presidente ha dicho, pienso que he estado dentro de la cuestión y lo expreso con todo respeto.

Para continuar y redondear la exposición que estoy realizando, quiero traer a colación algunos hechos que, como senador de la oposición, me parecen muy importantes.

El señor senador Cafiero manifestó en varias oportunidades que era necesario crear un Consejo de la Magistratura porque no teníamos un Poder Judicial independiente y que ese organismo no debía tener el predominio del oficialismo. Como opositores, esas expresiones nos llenan de satisfacción porque apreciamos que en el oficialismo hay senadores que piensan en la importancia de un Poder Judicial independiente y, como consecuencia lógica, en el Ministerio Público que, prácticamente, es un órgano tanto o más importante que el Consejo de la Magistratura.

Esas actitudes también son esgrimidas por otros senadores que consideran que en los tiempos que estamos viviendo es necesario que nuestras instituciones se perfeccionen para servir al pueblo. Pienso que debemos trabajar todos juntos y lograr las coincidencias en este sentido.

Los radicales o, digámoslo con mayor claridad, los hombres que integramos la Alianza estamos dispuestos a poner todo nuestro trabajo en beneficio del mejoramiento de las instituciones del país. No aceptamos lo que se dijo aquí respecto de que eludimos el trabajo y privilegiamos las conferencias de prensa. Yo diría lo contrario: no he participado nunca en una conferencia de prensa y me he dedicado siempre a trabajar.

Por otra parte, consideramos poco serias las apreciaciones del señor miembro informante de la mayoría, que no voy a contestar porque debemos concluir con el tratamiento de este tema lo antes posible.

Para terminar, quiero decir que con esta ley nunca más habrá cesantías arbitrarias en el país y se terminarán casos como el del doctor D'Alessio, ex procurador general de la Nación, que por presiones y exigencias del Ministerio del Interior tuvo que presentar su renuncia. Fue a partir de ese momento que el procurador general de la Nación dejó de ser un funcionario autónomo para pasar a depender del Poder Ejecutivo, situación que hemos estado viviendo hasta el presente. Espero, señor presidente, que con la presente ley de Ministerio Público terminemos definitivamente con ese estado de cosas.

Por estas razones, quiero que se sancione cuanto antes el proyecto en consideración para que en el país comience a correr aire fresco en este aspecto y se comience a marchar sobre la base de instituciones

respetables y dentro del marco de la Constitución, como garantía de la democracia y para bien de todo el pueblo argentino.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, quien había pedido la palabra para una aclaración.

**Sr. López.** — Señor presidente: dado que en su exposición el señor senador Usandizaga hizo notar que se encontraba solo en la interpretación que hizo de la Constitución Nacional, quiero dejar constancia de que lo acompaño en su criterio. En razón de que se trata de una cuestión que puede dar lugar a futuros debates, dejo sentada mi posición de apoyo a lo que el señor senador por Santa Fe ha manifestado.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: solicito que, mientras utilizo los diez minutos para hacer mi exposición, se llame a los señores senadores para que bajen al recinto y podamos proceder a votar el proyecto de ley en consideración.

—Se llama para votar.

**Sr. Alasino.** — Debo decir que la sanción que nos aprestamos a dar no solamente define el largo anhelo de crear el Ministerio Público como órgano extrapoder, situación que discutimos en este recinto cuando iniciamos los trámites de reforma de la Constitución.

Felizmente, hemos llegado a esta instancia en la que, prácticamente, con todo orgullo y decisión, podemos decir que hemos cumplido. No solamente hemos cumplido con una previsión de la Constitución sino también con una manifestación clara de la democracia que poníamos por delante cuando iniciamos esta discusión y que formara parte del objetivo de la reforma que aspirábamos a hacer en 1994.

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto aquí como en la Cámara de Diputados, han participado en la redacción del texto definitivo del proyecto de ley que hoy vamos a votar. De esta forma, daremos sanción a un régimen que regulará las funciones de las personas que tendrán a su cargo no solamente el control de legalidad sino también la representación de los intereses colectivos de la sociedad argentina.

Repito, señor presidente: el texto que consideramos tiene un alto nivel de consenso de los partidos políticos a los que me he referido. Además, al igual que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, aquí también se ha consultado a los colegios de profesionales, al Poder Judicial, a los miembros de lo que va a ser el futuro Ministerio Público como órgano extrapoder y a los integrantes de la Defensoría.

Más allá de las observaciones que cada uno de nosotros tenemos respecto de esta cuestión, se llega a una instancia en la que quizás sea necesario optar entre una ley óptima o una ley que pueda ser perfeccionada.

Celebro las afirmaciones que públicamente hizo aquí el señor senador por Córdoba, algunas de cuyas observaciones respecto del artículo 70, que generó una larga discusión en nuestro bloque, muchos miembros del justicialismo comparten. Porque no en vano han ocurrido casos como los que citaba el señor senador por La Rioja, con los que hemos quedado sorprendidos.

De alguna manera, con el texto de esta ley vamos a hacer borrón y cuenta nueva y no digo que estableceremos un bill de indemnidad pero si la garantía de que todos los que están trabajando en el Ministerio Público tienen el acuerdo, por medio de la ley.

Quizá desde la política no hemos tenido oportunidad —lo digo con todo respeto— de revisar la función que ella tiene como totalizadora de la actividad de las corporaciones que trabajan en la República en estos temas que son de interés general. Sin embargo, hemos optado por dejar en el ámbito del artículo 19 esto que puede ocurrir después. Me refiero a ese jury que hemos establecido para que, conocido algún tipo de conducta que esté reñida con la que todos pensamos deben tener los miembros del Ministerio Público, sea el que —frente a los magistrados que hoy tendrán la estabilidad absoluta— tenga el control y la posibilidad de remover o no, en su caso, a los miembros que estime que no cuentan con las calidades personales y profesionales que debe tener un integrante de este cuerpo que vamos a crear hoy.

Digo esto porque quiero aventar todo tipo de dudas. El señor senador por La Rioja ya adelantó que, más allá de las observaciones y de las dudas que muchos señores senadores tienen, vamos a votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados para, sin más trámite —creo que así lo señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales—, tener hoy aprobado el proyecto de ley.

Esta es la decisión del bloque. Algunos señores senadores han expresado sus observaciones aquí y otros lo han hecho en reuniones internas que hemos tenido. De todas maneras, cuando empiece a funcionar el Ministerio Público y podamos observar cómo lo hace, podremos elaborar un proyecto de ley que corrija los defectos que a lo largo de su funcionamiento se pongan de manifiesto.

Este texto contiene algunas de las premisas con las que estamos todos de acuerdo. Eso salva las observaciones en cuanto a las características que debe tener el Ministerio Público que, como ya se ha dicho, son la independencia, la autonomía y la autarquía.

Se trata de elementos que consideramos como una condición necesaria para que la población realmente sienta la vigencia de la ley y, fundamentalmente, el cumplimiento de los preceptos constitucionales.

Señor presidente: repito que el bloque Justicialista va a votar favorablemente el proyecto tal como viene de la Honorable Cámara de Diputados, en los términos que ha mencionado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es decir que se van a admitir las reformas con la convicción de que se podrá mejorar y con la más absoluta decisión de que cumplimos con un precepto constitucional, con una urgencia de la democracia y, fundamentalmente, con una aspiración que la Convención de Santa Fe plasmó en la Constitución en el año 1994 y que hoy hacemos realidad.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a poner a votación. Habida cuenta de que en la sesión de hoy se plantearon algunas dudas respecto de si se puede insistir en algunas sanciones o no y aceptar otras, por Secretaría se va a leer el artículo 177 del Reglamento.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (Lee) "Trámite. Artículo 177. Cuando la resolución sea aprobando totalmente un proyecto remitido por la Cámara de Diputados, además de comunicarse al Poder Ejecutivo, se avisará en respuesta a la mencionada Cámara.

"Cuando, como iniciador, vuelve al Senado un proyecto revisado por la Cámara de Diputados, y en el cual ésta hubiese desechado o modificado uno o más de sus artículos, puede el Senado insistir en ellos, o en alguno o algunos de ellos, en la totalidad de la redacción o parte de ella."

**Sr. Presidente (Menem).** — A la luz de esta disposición, entiendo que es perfectamente factible votar en la forma antes mencionada.

**Sr. Bauza.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Bauza.** — Señor presidente: dada la extensión del proyecto y teniendo en cuenta que ya ha sido suficientemente debatido, propongo que se vote por capítulos.

**Sr. Usandizaga.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Usandizaga.** — Señor presidente: tengo la sensación de que la lectura del Reglamento estaba dirigida a quien habla...

**Sr. Presidente (Menem).** — No, señor senador.

**Sr. Usandizaga.** — ...por la observación que hice durante el transcurso del debate.

De todas maneras, pienso que ni el Reglamento de esta Cámara ni la interpretación que de él haga la

Presidencia ni una ley del Congreso pueden modificar la Constitución Nacional, ya que ella sólo puede ser cambiada mediante una convención reformadora, que debe ser convocada de la forma que ella misma autoriza...

**Sr. Alasino.** – Estamos en eso. (*Risas.*)

**Sr. Usandizaga.** – No me cabe duda alguna. (*Risas.*)

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** – Finalizado este pequeño recreo, quiero decir al señor senador por Santa Fe que es obvio que ni esta Presidencia ni el Reglamento de la Cámara pueden modificar la Constitución Nacional.

Desde la banca ya sostuve cuál era mi interpretación y sólo quise hacer notar que esto está en el Reglamento y que así se viene interpretando de manera constante.

**Sr. Yoma.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: a fin de facilitar la votación, en caso de que haya acuerdo, quiero consultar a la Presidencia si es factible votar el texto tal como viene de la Cámara de Diputados, pero con la insistencia del Senado en cuanto al artículo 70. Si esa votación no reuniera los dos tercios, entonces quedaría sancionado el proyecto tal cual vino de la Cámara de Diputados. Reitero que esto lo planteo a modo de consulta.

**Sr. Presidente (Menem).** – En este caso, corresponde votar sólo en particular, habida cuenta de que esta iniciativa tuvo como Cámara de origen al Senado, de manera tal que ya ha sido aprobada en general.

Ahora bien, si no hay acuerdo en votar por unanimidad todos los artículos, voy a tener que practicar la votación de manera individual, o bien por capítulos como propuso el señor senador por Mendoza, para que los señores senadores puedan en cada artículo dejar sentadas sus discrepancias.

**Sr. Yoma.** – Correcto.

**Sr. Presidente (Menem).** – Por lo tanto, si no existe una opinión distinta, se votará en la forma aludida. Ruego a los señores senadores que, al momento de enunciarse los capítulos, hagan saber las observaciones que deseen formular.

Se va a votar el título I, capítulo I, artículos 1° a 4°.

**Sr. Genoud.** – ¿Podría la Presidencia aclarar qué se está votando?

**Sr. Alasino.** – Estamos votando el texto que vino de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Menem).** – Se está votando la sanción de la Cámara de Diputados. Creí que era obvio. Disculpeme, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se enuncia y aprueba el título I, capítulo I, artículos 1° a 4°.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el capítulo II, artículos 5° al 20.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el capítulo III, artículos 21 a 24.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado de la misma forma.

–Se enuncia y aprueba el título II, sección I, artículos 25 a 32.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba la sección II, capítulo I, artículos 33 a 42.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el capítulo II, artículos 43 a 50.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba la sección III, artículos 51 a 64.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba la sección IV, artículo 65.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia el título III, artículos 66 a 76...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** – Estamos votando por capítulos la sanción de la Cámara de Diputados. He aclarado que si algún señor senador, llegado el momento de votar el artículo respecto del cual tiene alguna disidencia, quiere referirse a él, debe hacerlo antes de que se vote el capítulo respectivo.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. De la Sota.** – Señor presidente: que conste mi voto negativo respecto del artículo 70.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Catamarca del Frente Cívico y Social.

**Sr. Villarreal.** – Señor presidente: quiero que conste expresamente mi voluntad de votar afirmativamente la sanción de la Cámara de Diputados con relación al artículo 70, ya que deseo ser consecuente con lo que he sostenido en el debate producido en el Senado el 6 de noviembre de 1996, en el que voté a favor de la estabilidad de todos los miembros del Ministerio Público, con excepción de la cabeza de los poderes, que requiere acuerdo.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: nuestro bloque va a votar afirmativamente este capítulo, salvo el artículo 70...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Yoma.** – Entonces, yo personalmente no voto el artículo 70.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** – Vamos a votar de la siguiente forma.

En primer término, voy a someter a votación la sanción de la Cámara de Diputados. Cada señor senador que no esté de acuerdo, podrá hacerlo saber y dejar constancia de su voto negativo. Entonces, con relación a este capítulo en el que existe esta disidencia, se va a votar artículo por artículo, hasta llegar al 70.

–Se enuncia y aprueba el artículo 66.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el artículo 67.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el artículo 68.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia y aprueba el artículo 69.

**Sr. Presidente (Menem).** – Aprobado por unanimidad.

–Se enuncia el artículo 70:

**Sr. Presidente (Menem).** – Señores senadores: reitero que está en consideración la sanción de la Cámara de Diputados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar:

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** – Queda aprobado...

**Sr. Genoud.** – Con un tercio queda aprobado...

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** – Pido que conste mi voto negativo con relación a este artículo.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sala.** – También pido que conste mi voto negativo con relación a este artículo.

**Sr. Presidente (Menem).** – También están levantando la mano en el mismo sentido el señor senador por Salta –justicialista–, los señores senadores por el Chaco, Sager y Zalazar, la señora senadora por Formosa, Peña de López, los señores senadores por San Luis, Bartolucci y Maranguello, el señor senador por Misiones, Oudín, y el señor senador por Jujuy, Tell. Consta que han votado negativamente el artículo 70. Debo entender que esta posición es insistir en la sanción del artículo 70, tal como había sido efectuada por la Cámara de Senadores.

–Se enuncian y aprueban los artículos 71 al 76.

–El artículo 77 es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. *(Aplausos.)*

Se va a votar el pedido de inserción solicitado por el señor senador por Corrientes.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** – Se procederá en consecuencia.

## 11

### MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

**Sr. Maya.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** – Señor presidente: solicito la alteración del plan de labor para considerar el mensaje 253 del Poder Ejecutivo nacional, en relación con el proyecto contenido en el expediente S.-85/98, del señor senador Alasino, con el proyecto del señor senador López, y con el proyecto de los señores senadores Pardo y quien habla.

**Sr. Presidente (Menem).** – En consideración la modificación del plan de labor planteada por el senador por Entre Ríos para tratar el tema al cual hizo referencia.